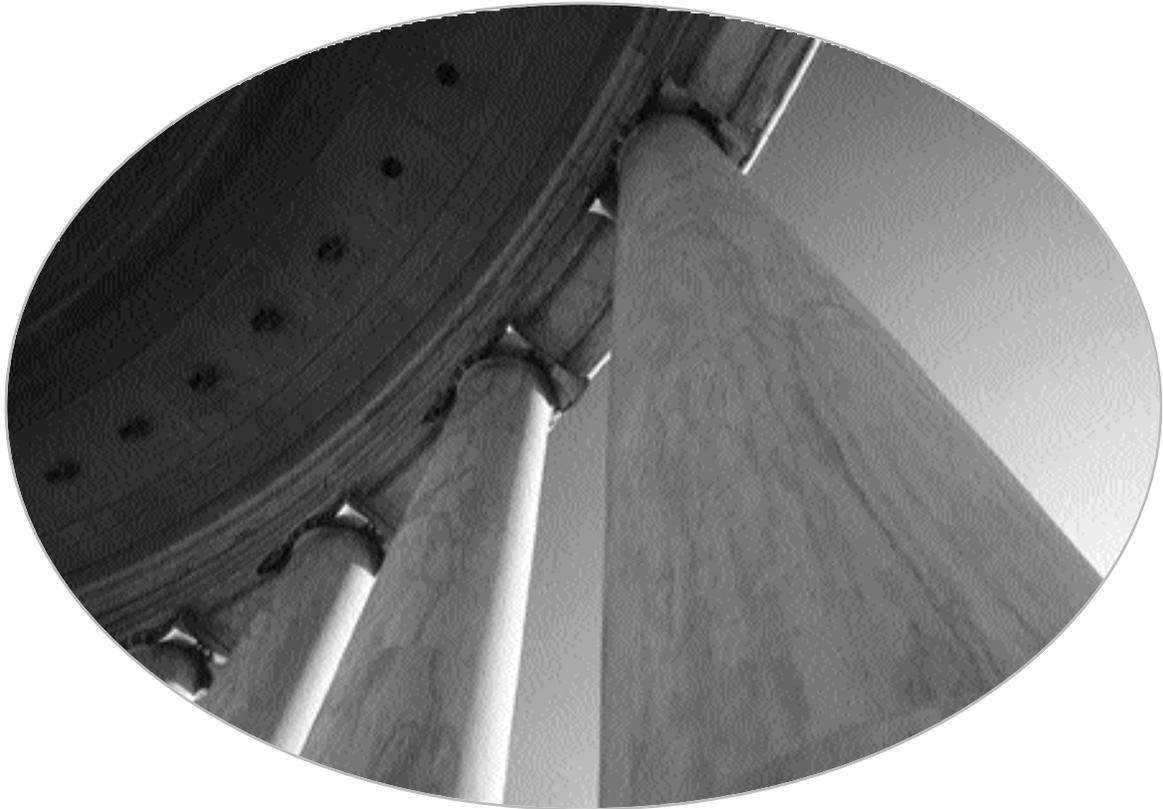


t e m a s d e l a
D e m o c r a c i a



LA JUSTICIA
PENAL EN
ESTADOS UNIDOS

J U L I O D E 2 0 0 1

VOLUMEN 6 NÚMERO 1

La Justicia Penal en Estados Unidos

De los Editores

ESTE PERIÓDICO ELECTRÓNICO enfoca el tema de la justicia penal en Estados Unidos. En todos los artículos se trata la tensión inherente que existe entre la necesidad de encausar a los delincuentes de una manera rápida y efectiva y la necesidad igualmente importante de proteger los derechos de todos los ciudadanos. La presunción de inocencia es un elemento central del sistema estadounidense. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se le halle culpable más allá de toda duda razonable — esta es la norma de todos los juicios penales en Estados Unidos.

Como lo confirma el catedrático James B. Jacobs en el primer artículo de este periódico electrónico, el sistema de derecho penal de la nación ha evolucionado significativamente desde la fundación de la República. Jacobs, titular de la Cátedra Warren E. Burger en la Universidad de Nueva York y director del Centro de Investigación del Delito y la Justicia de la misma universidad, explica la demarcación entre el procedimiento federal y el estatal, y el sistema de sentencias y apelaciones. Explica también cómo, en el transcurso de los años y particularmente durante el último siglo, se han ampliado los derechos de los norteamericanos

de conformidad con el sistema de justicia penal.

Al sistema de justicia penal de Estados Unidos se lo percibe ahora como más justo y equitativo que en épocas anteriores, particularmente en lo que concierne a las minorías y la mujer. Esto es de importancia en sí y por sí. Pero Tom Tyler, catedrático de psicología de la Universidad de Nueva York, comprueba que el hecho de que los norteamericanos perciben el sistema como mayormente justo y libre de prejuicios y acorde con sus propios valores, ayuda a generar una conducta de obediencia a la ley. Tyler aborda cuestiones tales como las motivaciones éticas en lo que concierne al cumplimiento de la ley, en comparación con la herramienta menos efectiva de la disuasión.

Especialmente en décadas recientes, numerosos estados han experimentado con reformas legales destinadas a hacer más eficaz y efectivo el sistema de justicia penal. Una de tales reformas es el surgimiento de la "justicia comunitaria" — que consiste en varias maneras de mediación entre el delincuente y la víctima. Dennis Maloney, director de Justicia Comuni-



taria Juvenil, organización no gubernamental del Condado de Deschutes, Oregón, que hace hincapié en la prevención del crimen y la colaboración, describe el sistema que existe en una jurisdicción de ese estado del oeste del país. Maloney defiende la innovación a la vez que reconoce sus fallas.

En nuestro estudio de un caso real, preparado para el periódico electrónico, el redactor colaborador David Pitts escribe sobre los Muchachos de Scottsboro, un caso legal muy importante que comenzó hace 70 años. El caso, definitivamente, es importante en lo que respecta a la

historia de los derechos civiles, pero es significativo también en la historia de la jurisprudencia norteamericana, ya que dio origen a dos dictámenes trascendentales del Tribunal Supremo de Estados Unidos que fortalecieron los derechos fundamentales de todos los norteamericanos. El caso de los Muchachos de

Cuatro de los nueve Muchachos de Scottsboro con el abogado Samuel Leibowitz en 1937. Su caso culminó en dos dictámenes trascendentales del Tribunal Supremo de Estados Unidos que reforzaron los derechos fundamentales de todos los estadounidenses. AP Photo.

Scottsboro vs. el estado de Alabama ilustra espectacularmente que los derechos, de conformidad con el sistema estadounidense, pueden ampliarse no sólo como resultado de cambios en el derecho penal de Estados Unidos, sino también debido a la revisión judicial y la supervisión constitucional.

El periódico electrónico concluye con una variedad de fuentes de consulta — libros, artículos y sitios de Internet — que ofrecen información adicional sobre la justicia penal en Estados Unidos.

Temas de la Democracia, Volumen 6, Número 1, julio de 2001

Índice

temas de la Democracia

Julio de 2001

6

EVOLUCIÓN DEL DERECHO PENAL DE ESTADOS UNIDOS

James B. Jacobs, titular de la Cátedra Warren E. Burger y director del Centro de Investigación del Delito y la Justicia de la Escuela de Abogacía de la Universidad de Nueva York (NYU), examina el sistema penal de la nación.

18

LA OBEDIENCIA A LA LEY EN ESTADOS UNIDOS:

LA JUSTICIA PROCESAL Y EL SENTIDO DE IMPARCIALIDAD

Tom Tyler, catedrático de psicología de la Universidad de Nueva York (NYU), analiza las percepciones y actitudes del pueblo estadounidense con respecto a su sistema de justicia penal y la manera en que tales opiniones influyen la conducta respetuosa de la ley.

25

EL SURGIMIENTO DE LA JUSTICIA COMUNITARIA

Dennis Maloney, director de Justicia Comunitaria, organización de gobierno local que colabora estrechamente con organizaciones no gubernamentales en el Condado de Deschutes, en Oregón, describe el sistema de "justicia comunitaria" que usa la mediación como herramienta para resolver diferencias entre el delincuente y la víctima.

33

LOS MUCHACHOS DE SCOTTSBORO Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Nuestro redactor colaborador David Pitts examina la historia de los Muchachos de Scottsboro, un caso de derechos civiles de alta resonancia que comenzó hace 70 años y culminó en dos dictámenes transcendentales del Tribunal Supremo que reforzaron los derechos fundamentales de todos los estadounidenses.

41

BIBLIOGRAFIA (EN INGLÉS)

Artículos y libros sobre la justicia penal de Estados Unidos.

45

DIRECCIONES DE INTERNET (EN INGLÉS)

Direcciones de Internet que tratan de temas de la justicia penal de Estados Unidos.

Las opiniones expresadas en otros sitios de Internet que aquí se indican no representan necesariamente las opiniones del gobierno de Estados Unidos.

PERIÓDICO ELECTRÓNICO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS
TEMAS DE LA DEMOCRACIA
LA JUSTICIA PENAL EN ESTADOS UNIDOS
JULIO DE 2001

DIRECTORA	Judith Siegel	EDITORES COLABORADORES	Estelle Baird	JUNTA EDITORIAL	Howard Cincotta
EDITOR	Anthony W. Sariti		Mona Esquetini		Judith Siegel
EDITOR CONSULTOR	Wayne Hall		Stuart Gorin		Leonardo Williams
EDITORIA DE INTERNET Y TEXTOS	Deborah M.S. Brown		Charla Hatton		
			John Jasik		
			David Pitts		
		ESPECIALISTAS DE CONSULTA	Anita Green		
			Andrea McGlinchey		
		DIRECTORA DE ARTE	Diane Woolverton		
		AYUDANTE DE GRÁFICAS	Sylvia Scott		

La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece productos y servicios que explican las políticas estadounidenses al público extranjero. La oficina publica cinco periódicos electrónicos que analizan los principales temas que encaran Estados Unidos y la comunidad internacional. Los periódicos — *Perspectivas económicas, Cuestiones mundiales, Temas de la democracia, Agenda de la Política exterior de Estados Unidos y Sociedad & valores estadounidenses* — ofrecen declaraciones de política estadounidense junto con análisis, comentarios e información de antecedentes en sus respectivas áreas temáticas. • Todos los periódicos aparecen en versiones en español, francés, inglés y portugués; algunos temas seleccionados aparecen también en árabe y ruso. Los periódicos en inglés se publican aproximadamente cada mes. Las traducciones se publican generalmente de dos a cuatro semanas después de la versión original en inglés. • Las opiniones expresadas en los periódicos no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos no asume responsabilidad por el contenido y acceso constante a los sitios en la Internet relacionados con los periódicos electrónicos; tal responsabilidad recae totalmente en los proveedores. Los artículos pueden reproducirse y traducirse fuera de Estados Unidos, a menos que haya restricciones específicas de derechos de autor. El uso de fotografías debe ser autorizado por las fuentes correspondientes. • Los números actuales o atrasados de los periódicos electrónicos, y la lista de los próximos periódicos puede encontrarse en la página de la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estados Unidos en la World Wide Web: <http://usinfo.state.gov/journals/jourspa.htm>. • También están disponibles en varios formatos electrónicos para facilitar su lectura en la pantalla, transferencia, descarga e impresión. Se agradece cualquier comentario en la oficina local de la Embajada de Estados Unidos o en las oficinas editoriales: Editor, *Issues of Democracy, Democracy and Human Rights* — IIP/T/DHR, U.S. Department of State, 301 4th Street, S.W., Washington, D.C. 20547, United States of America. • Es posible también comunicarse vía email a: ejdemos@pd.state.gov

Evolución del Derecho Penal de Estados Unidos

Por James B. Jacobs

En este compendio del sistema de justicia penal de Estados Unidos de James B. Jacobs, titular de la Cátedra Warren E. Burger y director del Centro de Investigación del Delito y la Justicia de la Escuela de Abogacía de la Universidad de Nueva York (NYU), explica la estructura y la jurisprudencia básica de los procedimientos del derecho penal estadounidense. La naturaleza fundamental de éste, dice Jacobs, reside en la Constitución de Estados Unidos y en la Declaración de Derechos. Es la Constitución la que inspira la organización judicial federal y de los estados y constituye la autoridad decisiva sobre lo que es permisible.

LOS CIMIENTOS DEL procedimiento penal de Estados Unidos se encuentran en la Constitución del país, incluyendo sus diez primeras enmiendas, que a su vez constituyen la Declaración de Derechos. La Constitución reconoce los derechos, garantías y libertades fundamentales de todos los habitantes de Estados Unidos. El más importante de estos derechos, en lo que se refiere a la justicia penal estadounidense, le otorga al acusado la presunción de su inocencia. El acusado no tiene que probar su inocencia. Corresponde al gobierno demostrar la culpabilidad de éste, más allá de una duda razonable. Derechos como éstos constituyen la armazón de la organización judicial federal y de los estados que la Constitución dispone. De importancia especial son las enmiendas Quinta, Sexta y Octava.

La Quinta Enmienda garantiza al acusado la excepción de cosa juzgada (protección contra el enjuiciamiento de una persona ya sometida a juicio por los mismos hechos) e impide que se le exija atestiguar contra sí mismo en casos



James B. Jacobs

penales. Lo que es más significativo, protege también el derecho del acusado al "debido proceso legal", un concepto de gran trascendencia expresado en la Declaración de Derechos, que especialmente en el siglo XX, fue interpretado por los tribunales para conferirles a los acusados una amplia gama de protecciones y derechos.

La Sexta Enmienda garantiza al acusado el derecho a "ser juzgado rápidamente y en público por un jurado imparcial del distrito y estado en que se haya cometido el delito". Esta enmienda le otorga también el derecho a que se le caree con los testigos que depongan en su contra (así como a repreguntar) y a tener el "asesoramiento de un abogado" que lo defienda. Con el transcurso de los años esta última protección también se ha ampliado y de hecho garantiza a todo acusado el asesoramiento legal apropiado en juicios penales.

La Octava Enmienda impide exigir "fianzas excesivas" a los acusados y prohíbe "las penas crueles y desusadas". Según la interpretación de los tribunales, esta última prohibición limita los tipos de penas que pueden infligirse. En 1972, las leyes que establecían la pena capital en 38 estados fueron efectivamente invalidadas con fundamento en esta disposición constitucional. Algunas se redactaron nuevamente con el fin de adecuarlas a la Constitución. Actualmente, 38 estados incluyen en sus leyes la pena capital. Sin embargo, este ejemplo sirve para ilustrar que es la Constitución de Estados Unidos la que rige suprema en el sistema estadounidense, no las leyes penales estadounidenses por si mismas. Ni el Congreso ni los estados pueden aprobar leyes que violen la Constitución.

Todo estado, así como el gobierno federal, tiene su propio "derecho penal sustantivo" (que especifica los delitos y las defensas) y su "procedimiento penal" (que especifica las diferentes etapas del proceso penal: arresto, juicio, sentencia, apelación y puesta en libertad). La legislatura de cada estado promulga las leyes penales que rigen en ese estado, los fiscales del estado y sus condados las hacen cumplir, los tribunales estatales y locales resuelven los casos a que den lugar y sus sentencias se cumplen en prisiones de los estados o en cárceles locales. El Congreso promulga las leyes penales federales, cuya aplicación, así como los procesos a que den lugar, la solución de los mismos y las sentencias están a cargo de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y de los fiscales, tribunales, prisiones y sistemas de libertad condicional y libertad vigilada del gobierno federal.

El sistema federal

Existen más de 20 agencias federales especializadas encargadas de la ejecución de la ley, la mayoría de las cuales forman parte de los Departamentos de Justicia y de Hacienda. De estas agencias las más prominentes son la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (del Departamento de Justicia) y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, el Servicio Secreto y el Servicio de Aduanas (del Departamento de Hacienda). Estas agencias tienen su sede en Washington y oficinas en todo el territorio de Estados Unidos y, en algunos casos, en el exterior.

Los fiscales federales, denominados "fiscales de Estados Unidos", son nombrados por el presidente para cada uno de los 94 distritos judiciales de Estados Unidos. Incumbe a éstos iniciar y continuar en los tribunales federales el encausamiento de delitos federales, únicamente. Debido a su nombramiento presidencial los fiscales federales tienen bastante independencia, pero también deben rendir cuentas al secretario de Justicia de Estados Unidos, quien dirige el Departamento de Justicia y por lo tanto es miembro del gabinete presidencial.

La división penal del Departamento de Justicia en Washington suministra asesoramiento, pericia técnica y alguna orientación y supervisión a los fiscales federales. La oficina central del Departamento de Justicia comprende también las unidades especiales de fiscalía que tienen autoridad en todo el país en materia de crimen organizado, crímenes de guerra, antimonopolio y tráfico

internacional de drogas; generalmente estas unidades obran en cooperación con los fiscales federales.

A los delincuentes que cometen delitos federales y son sentenciados a prisión, se los recluye en instituciones penales administradas por la oficina Federal de Prisiones, que es parte del Departamento de Justicia. Estas prisiones están dispersas por todo el territorio de Estados Unidos; un acusado que ha sido declarado culpable en un tribunal federal puede ser encarcelado en cualquier prisión federal. Sin embargo, menos de 10 por ciento de toda la población reclusa de Estados Unidos se encuentra en prisiones federales.

La justicia penal en el ámbito estatal y local

La mayoría de las actividades de la justicia penal se llevan a cabo con los auspicios de los gobiernos estatales y locales. La ejecución de la ley en los estados está en gran parte descentralizada en los condados, las ciudades y los pueblos. La policía de cada estado tiene jurisdicción sobre las principales carreteras de su estado, así como de las zonas rurales carentes de personalidad jurídica. Con frecuencia tiene además otras funciones limitadas, como el mantenimiento de antecedentes penales. Los fiscales generales de los estados, a diferencia del secretario de Justicia de Estados Unidos, usualmente tienen poca o ninguna autoridad para enjuiciar, aunque pueden tener la responsabilidad de argüir las apelaciones penales y defender las peticiones posteriores a las condenas. El enjuiciamiento es una función que está dentro de la esfera del condado. La mayoría de los fis-

cales, llamados fiscales de distrito, son elegidos a sus cargos.

Cada condado tiene una cárcel donde se recluye a los acusados en espera de juicio, así como a los acusados sentenciados por delitos leves o "faltas" (delitos punibles con una pena máxima de un año de prisión). Los departamentos encargados de la libertad condicional son generalmente regidos por el condado. Hay más de 20.000 departamentos de policía independientes que pertenecen a los gobiernos locales. La mayoría de éstos prestan sus servicios en pequeñas poblaciones y tienen menos de 20 agentes. Los departamentos de policía de las grandes ciudades, por el contrario, son enormes. Por ejemplo, el de la ciudad de Nueva York, el más grande del país, tiene aproximadamente 38.000 agentes de policía. A las personas procesadas en los tribunales de los estados por delitos graves y sentenciadas a prisión se las recluye en el sistema carcelario del estado, generalmente denominado "departamento correccional".

Derecho penal sustantivo de los estados

Aunque tiene origen en "la ley común o derecho inglés" (ordenamiento jurídico de tradición anglosajona), el derecho sustantivo penal de Estados Unidos es estatutario. En Estados Unidos no hay delitos de "ley común". En otras palabras, el derecho penal de cada estado lo determina la legislatura de ese estado y el derecho penal federal lo establece el Congreso. La mayoría de los estados, pero no el gobierno federal, tienen un "código" amplio de derecho penal sustantivo, compuesto de principios generales de responsabilidad penal, leyes que

definen delitos penales específicos y leyes que definen las excusas y las justificaciones.

Dos tercios de los estados han adoptado, en forma total o parcial, el Código Penal Modelo (MCP) redactado en las décadas de 1950 y 1960 por el Instituto Norteamericano de Derecho, prominente organización de reforma de las leyes. El MCP es el documento de mayor influencia en el derecho penal sustantivo estadounidense. Uno de los principios más arraigados del derecho penal de Estados Unidos consiste en que no puede haber responsabilidad penal sin haber culpabilidad. En el MCP, la culpabilidad, que algunas veces se denomina "mens rea", se establece demostrando intención, conocimiento, imprudencia temeraria o negligencia, todo lo cual se define cuidadosamente en el código. Salvo en el caso de delitos menores y de algunas contravenciones, el MCP requiere una culpabilidad especificada para cada uno de los elementos de una transgresión (conducta, circunstancias que rodean el hecho y consecuencias).

Los códigos penales establecen las prohibiciones que constituyen las leyes penales — los delitos contra la persona (e.g. asesinato y violación); los delitos contra la propiedad (e.g. hurto e incendio doloso); los delitos contra el orden público (e.g. perturbación del orden público y sedición); los delitos contra la familia (e.g. bigamia e incesto) y los delitos contra la administración pública (e.g. soborno y perjurio).

Derecho penal substantivo federal

¿Cuáles delitos se consideran federales y cuáles estatales? No hay una respuesta clara a esta pregunta. Ciertamente, la conducta susceptible de configurar un delito no puede dividirse en estas dos categorías. Cuando un acto único o línea de conducta viola tanto una ley federal como la ley de un estado, es posible, incluso, que ambos gobiernos entablen juicio, ya que según la doctrina de "soberanía dual", la prohibición de cosa juzgada (según la cual una persona no puede ser enjuiciada dos veces por el mismo delito) no tiene aplicación en el caso de procesos separados de soberanías separadas.

En teoría, el poder del Congreso está limitado por los poderes expresamente enumerados en la Sección 1ra. de la Constitución. Delitos como la falsificación de la moneda estadounidense, el ingreso ilegal a Estados Unidos, la traición y la violación de los derechos constitucionales y estatutarios federales están obviamente dentro de la jurisdicción básica del gobierno federal. Sin embargo, mediante la utilización de sus poderes expansivos a que da pie la cláusula de comercio y otras disposiciones elásticas, el Congreso ha promulgado leyes penales federales que tienen que ver con el tráfico de drogas, armas de fuego, secuestro, fraude organizado, hurto de automóviles, fraude y demás delitos.

El Tribunal Supremo rara vez ha dictaminado que el Congreso carece de potestad para promulgar una ley penal federal. Ello explica, en parte, el crecimiento inexorable del alcance del derecho penal federal durante todo el siglo XX. Hoy en día, el derecho penal federal puede utilizarse para entablar acciones judiciales contra

muchos delitos que tradicionalmente se consideraban responsabilidad de los estados. No obstante, en la práctica, la gran restricción del alcance del derecho penal federal está en los recursos. El FBI y otras agencias federales de ejecución de la ley, así como los fiscales federales, tienen la posibilidad de investigar y procesar solamente una pequeña fracción de todos los delitos potencialmente dentro de su competencia.

Procedimiento penal

Todos los estados y el gobierno federal tienen sus propios reglamentos de procedimiento penal. El Reglamento Federal de Procedimiento Penal lo redactan las comisiones jurídicas asesoras y lo promulga el Tribunal Supremo, sujeto a enmienda por parte del Congreso. Los reglamentos del procedimiento penal de los estados generalmente son instituidos por la legislatura de cada estado.

De los 23 derechos diferentes incluidos en las primeras ocho enmiendas de la Constitución 12 tienen que ver con el procedimiento penal. Antes de la Segunda Guerra Mundial, estos derechos se hacían valer sólo para proteger al individuo del gobierno federal. Desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente todos estos derechos han sido incorporados mediante la cláusula del debido proceso de la 14ta. Enmienda y también se han aplicado en la ejecución de las leyes estatales. La Constitución federal fija un mínimo, no un tope a los derechos del ciudadano frente a la policía, los fiscales, los tribunales y las autoridades penitenciarias. Los estados pueden otorgar más derechos a los acusados de delitos penales. Por ejemplo, estados como el de Nueva York prote-

gen substancialmente más los derechos de los sospechosos de delitos y de los acusados de delitos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En el lenguaje legal estadounidense la expresión procedimiento penal se refiere a las limitaciones constitucionales, estatutarias y administrativas de las investigaciones policiales (registro de personas, lugares y cosas; incautación e interrogación) así como a los pasos formales del proceso penal. Tanto la Cuarta como la Quinta Enmienda protegen a la ciudadanía, no sólo a los delincuentes y sospechosos de delito, de una actividad policial extralimitada.

Derecho al asesoramiento legal

El derecho al asesoramiento de abogado comienza cuando el individuo sospechoso es acusado, o sea al iniciarse el proceso judicial. Si el acusado es pobre de solemnidad, el juez le asigna un abogado defensor en su primera comparecencia ante el tribunal. De acuerdo con una decisión de el Tribunal Supremo de Estados Unidos (*Gideon contra Wainwright*, 1963) el gobierno debe designar abogados defensores a los pobres de solemnidad acusados de delitos graves. Casos posteriores ampliaron este fallo para incluir todos los casos en que haya la posibilidad de que el acusado sea enviado a una cárcel o prisión.

Fianza y prisión preventiva

Si el acusado se declara inocente, el juez debe decidir si se le libera en espera del juicio, en cuyo caso, también decide si se le debe impo-

ner fianza u otras condiciones. Históricamente, los tribunales han decidido que debe ponerse en libertad al acusado a menos que haya peligro de que huya. Típicamente, a pesar de la supuesta conexión entre la fianza y el asegurar la comparecencia a juicio, los jueces imponen fianzas elevadas a los individuos arrestados por delitos graves, debido a su preocupación por la seguridad pública, es decir, la posibilidad de que el acusado cometa otros delitos si se lo libera. El derecho federal permite la detención preventiva sin fianza en determinadas situaciones cuando el tribunal opina que el acusado presenta una amenaza grave de peligro futuro para la comunidad y que ninguna combinación de condiciones de libertad garantizaría razonablemente la seguridad de la comunidad.

Acusación formal y jurado indagatorio

Los fiscales estadounidenses tienen amplia facultad discrecional para decidir si se acusa al arrestado y el tipo y número de cargos en su contra. Sin embargo, al principio del proceso, la mayoría de los fiscales declara sin lugar las acusaciones contra un porcentaje considerable de arrestados por las siguientes razones:

- la conducta del arrestado no constituyó delito;
- aunque hubo un delito es demasiado insignificante para someterlo a juicio;
- aunque hubo delito, no es posible probarlo en ese momento y con respecto a ese acusado; y
- aunque hubo delito, el fiscal opina que la remisión, antes del juicio, a un programa de tratamiento o de otro tipo de programa es la solución más aconsejable.

El fiscal puede, hasta el momento en que comience el juicio, declarar sin lugar voluntariamente los cargos de que se imputa al acusado, sin que ello obre como obstáculo a nuevas acciones posteriores sobre la misma causa. La Sexta Enmienda dispone que no habrá acción penal a menos que medie acusación del jurado indagatorio. Este jurado de indagatorio es un cuerpo que investiga y determina si existen suficientes pruebas para procesar. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dictaminado que éste es uno de los pocos derechos establecidos por la Declaración de Derechos que no obliga a los estados. Por tanto, cada estado puede decidir por sí mismo si hace uso del jurado indagatorio para iniciar el procedimiento penal.

Al acusado se le debe llevar ante el juez, dentro de un período corto de tiempo, para informarle de los cargos que se le imputan. Durante esta audiencia inicial el juez lee los cargos contra el acusado y le exige que se declare culpable o inocente con respecto a cada uno de ellos, o inocente por razones de alteración de las facultades mentales. En general los estados también permiten la declaración de "nolo contendere" (acto procesal mediante el cual el acusado no se opone a la acusación ni la acepta), lo que en la práctica equivale a declararse culpable. Una declaración de inocencia puede cambiarse posteriormente a la admisión de culpabilidad. Sólo en circunstancias limitadas puede retractarse de una admisión de culpabilidad.

Peticiones antes del juicio

El reglamento de procedimientos penales dispone que el acusado y su abogado tienen un determinado número de días para interponer peticiones antes del juicio que impugnen la

suficiencia legal de la acusación o información o para solicitar la eliminación de las pruebas. Además, el acusado puede pedir la exhibición limitada de determinadas pruebas en posesión del fiscal. Según la mayoría de los reglamentos de los estados, la defensa, si así lo solicita, tiene derecho a la copia de cualquier declaración hecha por el acusado, copias de pruebas científicas y la lista de los testigos de cargo. En algunas jurisdicciones el acusado debe notificar por adelantado a la parte acusadora de su intención de atenerse a una determinada defensa, tal como una coartada o alteración de las facultades mentales.

Convenio declaratorio

A menudo la práctica estadounidense de "convenio declaratorio" se mal entiende. Esta práctica podría llamarse con mayor exactitud sistema de "descuentos" de admisión de culpabilidad. Más del 90 por ciento de los fallos condenatorios son el resultado de admisión de culpabilidad. Para la mayoría de quienes admiten culpabilidad no ha habido "convenio"; más bien el acusado ha aceptado la oferta del fiscal de dejar sin efecto algunos cargos a cambio de que el acusado se declare culpable de uno o más de los cargos restantes.

En el ámbito federal, existe la tradición del "convenio de cargo", esto significa que antes de que comience el juicio el fiscal deja sin efecto los cargos más graves y el acusado admite culpabilidad de un cargo menor. En algunos condados y ciudades el juez ofrece explícitamente el descuento de la pena aplicable. Por ejemplo, le promete al acusado un término mínimo de reclusión de tres años y un máximo de cinco si admite culpabilidad antes del juicio; no

obstante, el acusado puede arrostrar un mínimo de 5 a 10 años de prisión y un máximo de 15 si en el juicio se le declara culpable.

Derecho a juicio

El acusado tiene derecho a un juicio público. Por consiguiente, las salas de los tribunales están abiertas al público, incluyendo a periodistas. En realidad, según fallo de el Tribunal Supremo, el acusado no puede renunciar al derecho a juicio público, puesto que la ciudadanía comparte ese derecho; tampoco puede un juez prohibir que la prensa informe sobre los procesos penales. Esto no quiere decir, sin embargo, que se deban admitir en las salas de los tribunales las cámaras (de fotografía, de cine o de televisión). Algunos estados, como California, permiten la cobertura en vivo por televisión de los procesos penales. Sus partidarios afirman que esta cobertura ofrece educación legal a una enorme cantidad de público que de otro manera no presenciara nunca un juicio penal. Sus críticos arguyen que las cámaras de televisión en las salas de los tribunales influyen en la conducta de los abogados, del juez y de los jurados y alteran la atmósfera de estas salas. En los tribunales federales no se admiten cámaras.

En virtud de la Sexta Enmienda, el acusado de delito penal tiene el derecho constitucional de ser juzgado rápidamente. La ley que fija los términos de prescripción, no el derecho a ser juzgado rápidamente, gobierna la demora que puede haber entre la ejecución del delito y la presentación de cargos. La Constitución prescribe que no deberá haber demora indebida entre la acusación y el juicio. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha especificado nunca un

período definido de tiempo que de excederse violaría ese derecho. Cada caso tiene que ser evaluado individualmente. Todos los estados tienen leyes de juicios rápidos que establecen limitaciones de tiempo dentro del cual el fiscal y los tribunales deben someter a juicio al acusado.

La Sexta Enmienda garantiza también al acusado de un delito penal el derecho a juicio por jurado. Sin embargo, como sucede con la mayoría de los derechos, puede renunciarse a él. El acusado puede elegir un juicio sin jurado ante un solo juez o declararse culpable. Generalmente los acusados tienen una mayor probabilidad de absolución en juicios con jurado. Entre un cuarto y un tercio de los juicios por jurado terminan en absolución. Con todo, algunos acusados prefieren el juez al jurado porque creen que es más probable que el juez perciba las lagunas en la causa de la parte acusadora; que el juez sentenciaría en forma más indulgente después de un juicio "sin jurado" o que la naturaleza del delito podría enfurecer al jurado en contra del acusado.

Aunque la Constitución no lo requiere, en el sistema federal y prácticamente en todos los estados, el jurado debe llegar a un veredicto unánime; el jurado que no puede hacerlo es un "jurado en desacuerdo". En ese caso se declara el juicio nulo y el fiscal o la parte que promueve la acción debe decidir sobre un nuevo juicio. No hay límite en cuanto al número de veces que se puede enjuiciar a un acusado, pero pocos acusados son enjuiciados más de tres veces.

El juicio

Solamente el 10 por ciento o menos de los casos penales en Estados Unidos se resuelven mediante juicio. El juicio penal tiene su base en el procedimiento contencioso. El abogado de la defensa representa vigorosamente a su cliente, bien sea que crea o no en su culpabilidad. El fiscal representa al estado y al pueblo, pero también tiene la responsabilidad ética de actuar como un ministro de la justicia.

La Constitución requiere que, para poder declarar culpable al acusado, sea quien sea el que determine los hechos relativos a una causa, el jurado o el juez, debe concluir que el fiscal ha demostrado la validez de cada uno de los elementos del delito más allá de una duda razonable. Este es el significado de la máxima, tantas veces citada, "al acusado se le presume inocente". Ambas partes tienen el derecho a ofrecer sus propios testigos y a citar a los testigos que no quieran comparecer voluntariamente. Los abogados someten a interrogatorio a sus propios testigos y a contrainterrogatorio a los testigos de la otra parte. El juez, pero no los miembros del jurado, puede formular preguntas a los testigos, sin embargo, de acuerdo con el procedimiento contencioso estadounidense, los abogados hacen prácticamente todas las preguntas y el juez actúa de árbitro imparcial. Acogiéndose a la Quinta Enmienda, el testigo puede rehusarse a declarar si cree, con fundamento, que el testimonio podría incriminarlo. El fiscal tiene la potestad de otorgar inmunidad al testigo y luego exigirle que conteste a todas las preguntas. (La defensa no tiene tal facultad). La inmunidad abarca cualquier delito admitido por el testigo, así como cualquier otro delito que los investigadores descubran como resultado del testimonio motivo de inmunidad.

Sentencia

Las legislaturas, los tribunales, los departamentos de libertad condicional, las juntas de libertad vigilada y, en algunas jurisdicciones, las comisiones que determinan la pena aplicable, tienen, todos, una función en el proceso de imposición de la sentencia. En lo que se refiere a la primera de estas agencias, la sanción penal, o por lo menos la pena máxima permisible por cada delito, la prescriben los legisladores. Las leyes de los estados sobre la imposición de las penas varían considerablemente y algunas veces en un mismo estado éstas difieren según el delito. La sanción la impone el juez, luego de una audiencia especial para imponer la pena durante la cual el fiscal y el abogado de la defensa presentan sus argumentos en favor de la sentencia que cada cual considere apropiada. Generalmente, al acusado se le da la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de la sentencia. En algunas jurisdicciones, la víctima o un representante de ésta, puede dirigirse al tribunal también. El abogado defensor muy posiblemente hará hincapié en el remordimiento del acusado, sus responsabilidades familiares, las buenas perspectivas de trabajo y su receptibilidad a tratamiento de consulta externa (si es necesario) dentro de la comunidad; el fiscal, por su parte, probablemente destacará antecedentes penales previos, el perjuicio causado a la víctima y a su familia y la necesidad de disuadir a otros posibles delincuentes.

Al juez lo asesora la entidad encargada de la libertad condicional que investiga independientemente los antecedentes del acusado, los antecedentes penales previos, las circunstancias del delito y demás factores. El juez no tiene que hacer una determinación formal de los

hechos, ni necesita redactar una opinión para explicar o fundamentar la sentencia. La sentencia no puede ser apelada siempre y cuando se encuentre dentro de los límites estatutarios.

Sanciones

La libertad condicional es la sentencia que más comúnmente dictan los jueces de los tribunales penales estadounidenses. De hecho, el acusado puede evitar ser recluido si observa buena conducta y se adhiere al reglamento, normas y requisitos de comparecencia de la entidad encargada de la libertad a prueba. El juez decide la duración del período de libertad vigilada; no es inusual que éste sea de varios años. El juez tiene también la facultad de imponer condiciones especiales, tales como la participación en un programa de tratamiento de la toxicomanía, mantenimiento del empleo o asistencia a la escuela, si se trata de un menor.

La reclusión carcelaria es un tipo de sentencia que se utiliza ampliamente; en 2001, en un día cualquiera, la población reclusa en Estados Unidos llega a aproximadamente 2 millones. Cada uno de los estados, así como el gobierno federal, tienen su propio sistema penitenciario. Las administraciones penitenciarias clasifican a los transgresores (de acuerdo con el riesgo de peligro, riesgo de fuga, edad, etc.) para asignarlos a una institución penal de seguridad máxima, mediana o mínima.

En años recientes, la confiscación de la propiedad ha aumentado en forma espectacular como sanción penal, especialmente en los casos relacionados con las drogas y el crimen organizado. Típicamente las leyes de confiscación de

la propiedad disponen que, como parte de la sanción penal, el juez puede ordenar que el acusado pierda toda propiedad empleada para cometer el delito (automóviles, barcos, aviones e incluso casas) y/o el producto de la actividad delictiva (empresas, cuentas bancarias, valores, etc.).

Los tribunales de Estados Unidos imponen multas con menor frecuencia. Cuando lo hacen, usualmente esto es además de otras sanciones. Tradicionalmente el monto de las fianzas ha sido bajo, ciertamente mucho más bajo que el honorario de un abogado penalista privado. Recientemente, sin embargo, las multas máximas han aumentado espectacularmente. El Tribunal Supremo ha dictaminado que cuando se imponen multas, no se puede recluir al acusado por falta de pago de las mismas, a menos que la falta de pago sea deliberada.

Apelación y recursos después de la condena

La Constitución no le garantiza el derecho de apelar a quien ha sido declarado culpable, pero todas las jurisdicciones permiten por lo menos una apelación como derecho y muchos estados tienen dos niveles de tribunales de apelación y dos niveles de apelación. En el segundo nivel de apelación, en algunas jurisdicciones, el tribunal tiene discreción para conocer únicamente las causas que escoja. Debido a la garantía de excepción de cosa juzgada, el fiscal no puede apelar un veredicto de inocencia. Por tanto, la sentencia absolutoria se mantiene aunque esté basada en un error insigne del juez al interpretar la ley o en una determinación incomprensible de los hechos por parte del juez o el jurado.

Una vez que el transgresor ha agotado sus apelaciones ante el tribunal de un estado, puede presentar una petición de "habeas corpus" ante el tribunal del distrito federal (de primera instancia) en la que alegue que el estado, al mantenerlo recluido, viola sus derechos legislados o constitucionales garantizados por el gobierno federal. (Los reclusos federales también pueden presentar ante los tribunales federales peticiones de reparación posteriores a la condena, por ejemplo, en casos en que nuevas pruebas, que no habrían podido ser descubiertas antes del juicio, demuestran su inocencia). El derecho de habeas corpus está garantizado por la Constitución y su cumplimiento por una ley federal. En algunas circunstancias limitadas, el transgresor que no tuvo éxito en su primer intento de habeas corpus puede presentar peticiones adicionales de habeas corpus al argumentar que han ocurrido otras violaciones constitucionales.

Libertad vigilada, absolució y conmutación

Tradicionalmente las juntas que deciden la libertad vigilada han tenido una función importante en que se libera a los prisioneros. Todos los estados tienen sus juntas de libertad vigilada cuyos miembros son nombrados por el gobernador. Estas juntas usualmente son componentes de una agencia principal de libertad vigilada que supervisa a los transgresores cuando salen de la cárcel. La ley de cada estado establece cuando un prisionero llena los requisitos de libertad vigilada, de tal manera que existe una variación considerable entre los estados.

En un sistema penal en el que el juez sólo especifica una sentencia máxima, el prisionero podría llenar los requisitos de libertad vigilada, por ejemplo, después de cumplir una tercera parte de la sentencia. Los miembros de la junta de libertad bajo palabra usualmente realizan entrevistas breves en la prisión con el posible candidato. En general la junta está interesada en la adaptación del recluso en la prisión, pero, invariablemente considerará los hechos relativos al delito así como los antecedentes penales previos de éste.

Por último, los gobernadores de los estados están facultados para perdonar o conmutar las sentencias dictadas en sus respectivos estados. El presidente de Estados Unidos tiene una potestad similar con respecto a transgresores dentro del ámbito federal. A menudo las leyes contemplan el nombramiento de una junta de perdón, que estudia las peticiones, realiza las investigaciones y formula recomendaciones positivas al jefe ejecutivo. Con frecuencia se insta a los gobernadores, especialmente de los estados donde abunda la pena capital, a que conmuten las sentencias de muerte. A diferencia de muchos otros países, la amnistía general no forma parte del Derecho o de la tradición estadounidenses.

El sistema judicial de menores en Estados Unidos

El sistema judicial de menores consta de leyes y procesos penales totalmente separados. En teoría, este sistema de leyes e instituciones, creado por reformistas progresistas de principios del siglo XX, funciona en interés del transgresor menor edad. La justicia de menores se imparte en los tribunales de menores o en los tribunales de relaciones familiares, no en los tribunales penales. El objetivo no es la retribución o la disuasión, sino la rehabilitación. Los casos que se llevan a los tribunales de menores incluyen a niños víctimas de abuso y niños a quienes los padres y las autoridades escolares consideran incorregibles.

La edad máxima para encausar a un transgresor como menor varía entre 16 y 21 años, según la jurisdicción y dentro de una misma jurisdicción y según el tipo de delito de que se acuse al menor. De tal manera que hay leyes que permiten (y en algunos casos exigen) que a los menores se los trate como adultos si el delito es homicidio u otros tipos de delitos violentos. En general, en el sistema judicial para menores, se trata más benignamente al acusado que en el sistema para adultos, aunque el primero ofrece menos derechos procesales.

En los casos de delincuencia que llegan al punto de una decisión judicial, el juez debe determinar los hechos según normas que se semejan mucho a las que aplican en los procesos penales. Al menor que ha sido arrestado se lo lleva a un centro de deten-

ción de menores, separado de la cárcel para adultos y administrado generalmente por una agencia especializada del gobierno local o del condado. El menor no tiene derecho a fianza. Su situación, previa al proceso, depende únicamente de que el juez determine si el menor debe permanecer en detención preventiva para impedir su fuga o para proteger a la comunidad del riesgo de que éste cometa otros delitos.

Al menor no se lo acusa de delitos según la ley, sino de delincuencia. Sin embargo, el menor tiene derecho a asesoramiento legal y a que se le presuma inocente. Los menores no tienen derecho a juicio por jurado, pero aproximadamente un cuarto de los estados ha promulgado leyes que establecen la opción de juicio por jurado en casos de menores. El jurado o el juez deben decidir si el menor acusado es culpable más allá de una duda razonable. En la mayoría de los estados, el transgresor menor que es hallado culpable debe ser liberado del "reformatorio" o institución correccional al cumplir los 21 años de edad. Durante la mayor parte del siglo XX, los antecedentes penales de los menores permanecieron sellados; ahora, usualmente están a disposición de la policía, los fiscales y los jueces en los tribunales para adultos. En la actualidad, se llevan a cabo una gran cantidad de reformas en la leyes que gobiernan el sistema judicial de menores, especialmente se tiende a establecer un trato más severo y más parecido al que rige para los transgresores adultos.

La Obediencia a la Ley en Estados Unidos: La Justicia Procesal y el Sentido de Imparcialidad

Por Tom Tyler

¿Cómo se estimula en una sociedad la observancia de la ley? ¿Depende esto únicamente del temor de ser castigado? ¿O es que el sentido público de justicia e imparcialidad sugiere otras estrategias más efectivas? En sus estudios de este tema, Tom Tyler, catedrático de psicología de la Universidad de Nueva York, y otros expertos, han descubierto que los norteamericanos, y por extensión el público en general, esencialmente obedece la ley porque percibe que el proceso es justo e imparcial y conforme con sus propios valores.

EN ESTADOS UNIDOS, el público cree que los funcionarios de policía y los jueces son autoridades legales que tienen poderes considerables que pueden emplear para hacer cumplir la ley. Se los considera autoridades cuyas decisiones están respaldadas por el uso potencial de la fuerza disuasiva mediante castigo, y a quienes mayormente se los obedece.

Sin embargo, la realidad, en lo que respecta a la autoridad jurídica estadounidense, difiere grandemente en dos maneras. Primero, si bien es cierto que los norteamericanos generalmente respetan la ley, y que muchas veces están dispuestos a someterse a las decisiones de la policía y de los jueces, su cumplimiento de la ley no puede darse por sentado. Las autoridades jurídicas estadounidenses siempre han tratado de fomentar en el público el acatamiento de la ley, y existen muchas indicaciones de que esta lucha se hace más difícil. Los agentes de policía norteamericanos, en su trato con los ciudadanos, señalan que cada vez les es más



Tom Tyler

difícil lograr acatamiento por parte del público, y los jueces informan que es más difícil ejecutar las decisiones judiciales y lograr que el comportamiento de los ciudadanos corresponda con las órdenes de los tribunales. En términos de la influencia que la ley tiene en la vida diaria de las personas, hay indicaciones de que, en una amplia gama de comportamientos - desde pagar el impuesto sobre la renta hasta parar frente a las luces rojas del tránsito - los norteamericanos prestan menos atención a la ley. No se debe exagerar la magnitud de estos problemas de acatamiento de la ley, pero las autoridades jurídicas cada vez más dirigen su atención a la necesidad de comprender mejor por qué la gente obedece la ley.

La motivación ética en el acatamiento de la ley

Es interesante notar que los estudios realizados revelan que la motivación que sustenta el acatamiento diario de la ley no es, típicamente,

el temor a ser castigado por ignorar o resistir la ley, lo que constituye la base de los modelos de disuasión. En cambio, lo que motiva principalmente a las personas a obedecer la ley es algo de carácter ético. Hay dos motivaciones de naturaleza ética que anteceden al acatamiento: la legitimidad y la moralidad. La legitimidad se refiere a la creencia de que a la autoridad hay que obedecerla. Los norteamericanos generalmente expresan estar muy inclinados a obedecer a la policía y a los tribunales. Por ejemplo, casi todos los norteamericanos convienen en que deberían "obedecer la ley, aun cuando piensen que está equivocada". Cuando las personas consideran que las autoridades jurídicas son legítimas, acatan en forma voluntaria sus órdenes, aun cuando no crean que serán aprehendidas y castigadas por ignorarlas.

En su libro titulado, *Justice, Liability and Blame: Community Views and the Criminal Law (Justicia, responsabilidad y culpabilidad: Opiniones de la comunidad y el derecho penal)*, Paul Robinson y John Darley explican que la moralidad personal implica el grado en que las personas creen que la ley concuerda con sus propias ideas sobre lo que está bien o mal. En algunos casos, la moralidad del público es altamente compatible con la ley. El asesinato es ilegal, y la mayoría de la gente cree que también es moralmente incorrecto. Sin embargo, en otros casos esto quizás no sea así. En lo que respecta a beber, consumir drogas, copiar programas de computadora y hasta cumplir con los reglamentos sobre el estacionamiento de automóviles, algunos segmentos de la población estadounidense no consideran su conducta moralmente equivocada, aun cuando esos comportamientos sean contrarios a la ley.

En un estudio realizado en 1990 sobre por qué el público obedece la ley, yo comparé directamente la influencia que ejercen sobre las personas los criterios sobre riesgos, las opiniones acerca de la legitimidad de las autoridades jurídicas y los criterios sobre la moralidad de la ley, en lo que respecta al acatamiento diario de la ley. Encontré que tanto la legitimidad como la moralidad influyen en el acatamiento de la ley, independientes de los criterios sobre el riesgo de ser aprehendido y castigado por la fechoría. La mayor influencia fue la moralidad, seguida de la legitimidad. Las consideraciones sobre riesgos influyeron también en el acatamiento, pero de las tres influencias descritas, éstas fueron la más débil. En otras palabras, los criterios de naturaleza ética tuvieron la mayor influencia sobre el acatamiento de la ley, y las consideraciones de los riesgos fueron las menos influyentes.

El problema de la disuasión para asegurar el acatamiento

Otros estudios sugieren que la amenaza o el uso de sanciones, que da cuerpo a las consideraciones de los riesgos, influyen también en cierta medida en el comportamiento relacionado con la ley. Sin embargo, de igual manera que en mi estudio, generalmente se determina que la magnitud de esa influencia es pequeña. Por ejemplo, en una reseña de la literatura sobre el consumo de drogas en Estados Unidos, Robert MacCoun encontró, en un artículo sobre drogas y la ley, aparecido en *Psychological Bulletin*, que aproximadamente cinco por ciento de las variaciones en el consumo de drogas por parte de los ciudadanos se debe al criterio que ellos tienen sobre las probabilidades de ser aprehen-

didos y castigados por la policía y los tribunales. Esta conclusión es típica de los hallazgos realizados en los estudios sobre el acatamiento de la ley: se ha encontrado que la disuasión ejerce, en el mejor de los casos, una pequeña influencia sobre el comportamiento de las personas.

La consecuencia práctica de esta conclusión es que la policía y los tribunales tienen dificultades en aplicar eficazmente la ley cuando únicamente pueden depender de su poder de castigar a las personas. Sin una amplia legitimidad, y/o cuando aplican leyes que no son compatibles con la moralidad del público, las autoridades no pueden realizar bien su trabajo. Este es el caso tanto en el derecho penal como en derecho civil de Estados Unidos, es decir, los esfuerzos de las autoridades jurídicas de mantener el orden público y resolver disputas entre los ciudadanos.

Las consecuencias de una escasa legitimidad se observan cuando se examina el efecto que la falta de confianza en la policía y los tribunales tiene entre los ciudadanos de grupos minoritarios. Esta falta de legitimidad no sólo lleva a una mayor conducta ilegal entre los ciudadanos de grupos minoritarios, sino que a una renuencia general entre los miembros de la comunidad minoritaria a colaborar con la policía para abordar problemas de delincuencia. Entre los ejemplos famosos de problemas que surgen cuando la ley se aparta de la moralidad pública, sacados de la historia de Estados Unidos, figura la ley que hacía ilegal el consumo de alcohol (la Prohibición) y las continuas gestiones para aplicar las leyes contra la prostitución y los jue-

gos de azar. Cuando quiera que la policía procura aplicar las leyes contra un comportamiento que algunos segmentos del público no consideran moralmente incorrecto, la tarea de la policía es más difícil.

¿Cómo se puede abordar este asunto? Un planteamiento posible podría ser el aumento drástico del número de las fuerzas policiales y el otorgamiento de más poder para que se entremetan en la vida diaria de la gente, lo cual aumentaría las probabilidades de que los que quebrantan las leyes fuesen aprehendidos y castigados por sus infracciones. Esto, a su vez, aumentaría las consideraciones sobre el riesgo de ser aprehendidos, y por lo tanto disuadiría el comportamiento delictivo. Por ejemplo, algunos países, en su afán de impedir que alguien conduzca automóvil en estado de embriaguez, permiten que la policía coloque barreras para detener a los automovilistas, mientras que otros países permiten que la policía pare e interrogue a cualquier ciudadano en la calle o en el automóvil, y hasta lo encarcele sin habersele acusado de nada. No se sabe con certeza qué efecto tendría realmente en el comportamiento del público el dar a las autoridades jurídicas tales poderes mayores, pero es posible imaginar las estrategias que se podrían usar para que la disuasión fuese más efectiva.

Hay varias dificultades asociadas con procurar acrecentar el mandato de la ley mediante la disuasión. Una de las cuestiones es que fortalecer el poder del gobierno en Norteamérica es contrario a la importancia que siempre se ha dado a la libertad y los derechos personales firmemente arraigados en la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de

Derechos de Estados Unidos. Esta tradición democrática ha sido asociada con la disposición general de los norteamericanos a acatar el gobierno y la ley, pero el acatamiento no es automático, y sospechar del gobierno y desafiar las leyes que se consideran innecesariamente intrusas son otros elementos de larga data de la cultura política y jurídica norteamericanas. Por lo tanto, aumentar el poder del gobierno podría tener el efecto de socavar la legitimidad y reducir el acatamiento de la ley. Otra cuestión es si es realista pensar que las estrategias para cambiar las consideraciones sobre el riesgo alterarían efectivamente el comportamiento del público. Como se ha indicado, los cambios en el criterio acerca de los riesgos, ejercen en el mejor de los casos, una influencia menor en tal comportamiento.

La imparcialidad procesal en el acatamiento de la ley

¿Existe un planteamiento alternativo para crear y sostener un sistema jurídico viable? Estudios recientes en lo que respecta a la base en que el público reacciona a las leyes norteamericanas y las decisiones de las autoridades jurídicas, apuntan a un planteamiento posiblemente importante. Debido a que la policía y los tribunales son autoridades reguladoras de la sociedad, con frecuencia se ven obligados a tomar decisiones en cuanto a resultados que el público considera indeseables y hasta injustos. La policía, por ejemplo, les dice a las personas que no hagan lo que esas personas quieren hacer, y refuerza esas órdenes con amenazas, arrestos y hasta fuerza física. Los jueces muchas veces deben ejecutar la ley e imponer multas o condenas de prisión. Muchas veces se supone que tales resultados indeseables se

aceptan únicamente cuando las autoridades jurídicas están respaldadas por la amenaza o el uso de fuerza.

Los estudios de las reacciones del público a experiencias personales con la policía y los tribunales sugieren una imagen diferente y mucho más positiva de cómo los ciudadanos reaccionan a las decisiones tomadas de las autoridades jurídicas. Estos estudios demuestran que los individuos aplican criterios éticos al evaluar sus experiencias personales. En particular, evalúan sus experiencias con las autoridades jurídicas a través de un filtro de justicia procesal. Los estudios revelan constantemente que la base principal de que el público acepte o rechace las decisiones de los funcionarios policiales y los jueces es su evaluación de la imparcialidad de los procedimientos utilizados por las autoridades al tomar esas decisiones.

Considérese un ejemplo. Entrevisté a personas que tuvieron que comparecer ante el juez en un tribunal de tránsito en Chicago, Illinois. En ese entonces era común declarar sin lugar los casos cuando las personas comparecían ante el tribunal, basándose en la suposición de que comparecer en el tribunal era castigo suficiente por infracciones menores. Por lo tanto, no se los multaba y no tenían antecedente alguno. Habríamos esperado que estuvieran contentos. Sin embargo, constantemente observé que estaban enojados. ¿Por qué? Porque no consideraban justa esta manera de disponer de los casos. Deseaban tener un juicio en el que pudieran presentar sus pruebas y oír una decisión legal acerca de los méritos de su multa. Un resultado favorable era para ellos menos importante que

poder presentar su caso en el tribunal.

En *The Social Psychology of Procedural Justice (La Psicología Social de la Justicia Procesal)*, E. Allan Lind y yo entrevistamos a varias personas que tenían tratos personales tanto con funcionarios policiales como con jueces. Vimos repetidamente que los individuos reaccionan fuertemente a sus evaluaciones de la imparcialidad de estas autoridades jurídicas. Los que creen que se los trata imparcialmente tienen más propensión a aceptar las decisiones, aun cuando éstas sean desfavorables, sin tomar en consideración si creen que serán aprehendidas y castigadas si no las aceptan. ¿Por qué es esto así? La experiencia de procedimientos justos despierta en las personas el sentimiento de la obligación de obedecer. Conduce también a que consideren que las decisiones son más compatibles con sus propios valores morales. Por estas razones, están más dispuestos a aceptar estas decisiones. Este hallazgo es importante porque implica que las personas, cuando reaccionan a sus experiencias con la policía y los tribunales, se concentran en temas éticos y no en sus beneficios y pérdidas personales.

Estos hallazgos sugieren que las autoridades jurídicas pueden lograr que sus decisiones se acepten si prestan atención a cómo se toman esas decisiones. Un estudio realizado en 1997 por Paternoster et al., indica que, con el tiempo, la aceptación de estas decisiones aumenta, puesto que la gente siente una mayor responsabilidad de aceptarlas y obedecer leyes similares en el futuro. El estudio de 1997 muestra que las personas que creyeron que la policía las había tratado en forma justa son más propensas

a cumplir con la ley durante un período de seis meses después de su experiencia. Puesto que la policía no estaba presente durante todo ese tiempo o la mayor parte del mismo, los individuos mismos asumieron la responsabilidad de cumplir con la ley.

La experiencia de haber sido tratadas en forma justa impulsó a esas personas a consentir a la regulación social y se sintieron personalmente obligadas a cumplir la ley.

¿Qué elementos del procedimiento dan forma a los juicios que la gente hace acerca de la imparcialidad de tales juicios? Los estudios sugieren que el público tiene modelos complejos de justicia procesal y muchas veces considera ocho o más temas distintos de justicia cuando decide cuán imparcial es un procedimiento jurídico. Generalmente se encuentra que cuatro son las cuestiones de importancia.

- Primero, las personas aprecian la oportunidad de participar y dar sus opiniones cuando se toman las decisiones.
- Segundo, desean que los procedimientos sean neutrales, imparciales, basados en criterios concretos y en una aplicación uniforme de las reglas.
- Tercero, desean ser tratadas con dignidad y respeto, y ver que se reconozcan sus derechos.
- Cuarto, desean sentir que las autoridades han considerado sus necesidades e inquietudes, y han sido honestos al comunicarse con ellas.

En las discusiones sobre si una orden de alguna autoridad jurídica se debe o no se debe aceptar, estos temas generalmente son más importantes que la evaluación de la imparcialidad de la decisión misma.

Implicaciones de la justicia procesal en el establecimiento de la autoridad jurídica

Los ciudadanos, según sea la naturaleza de la cuestión o problema, atribuyen diferente importancia a estos elementos. Así, por ejemplo, las oportunidades de proveer información son especialmente importantes cuando las autoridades tratan de arreglar una disputa entre varias personas. Por otro lado, la etnicidad de la persona, su sexo y situación social, no influyen en sus opiniones sobre lo que hace que un procedimiento sea justo. Esto sugiere que la imparcialidad procesal puede ser un mecanismo especialmente valioso para encontrar soluciones a disputas que cruzan los límites sociales. Los estudios encontraron que personas de diferentes grupos económicos, sociales o ideológicos, tienen con frecuencia ideas opuestas acerca de qué tipo de resultado les es favorable a ellas o a su grupo. Estas mismas personas, sin embargo, tienen mucho más en común cuando se les pregunta acerca de los atributos de un proceso imparcial de toma de decisiones. Puesto que se ha notado que la habilidad que un procedimiento imparcial tiene para facilitar la aceptación de las decisiones, es alentador que las personas parecen estar ampliamente de acuerdo en lo que constituye un procedimiento justo.

Hallazgos similares sobre la justicia procesal surgen cuando examinamos el cumplimiento diario de ley por parte de las personas. Es más probable que obedezcan la ley cuando tienen confianza en la imparcialidad de los procedimientos usados por las autoridades y las instituciones jurídicas. Por lo tanto, al adoptar con imparcialidad sus decisiones, las autoridades jurídicas crean una cultura legal en la que el individuo siente la responsabilidad personal de atenerse a la ley. Tal sociedad autorreguladora se basa en los sentimientos de responsabilidad y obligación de los ciudadanos hacia la ley, y en su disposición de seguir los dictados de sus propios valores morales. La clave para crear y sostener tal sociedad es el uso de procedimientos imparciales por parte de las autoridades jurídicas.

Temas de la Democracia, Volumen 6, Número 1, julio de 2001

El Surgimiento de la Justicia Comunitaria

Por Dennis Maloney

¿Qué pasaría si, en lugar de seguir el método probado y cierto para ocuparse de un delincuente, hubiera un enfoque más efectivo, de base más popular? En lugar de pasar por un largo proceso de enjuiciamiento, en el cual el delincuente puede o no ser declarado culpable, la comunidad podría trabajar con y a través de una agencia especial organizada para mediar entre el delincuente y la víctima. Dennis Maloney, director de "Juvenile Community Justice" (Justicia Comunitaria Juvenil), una organización de gobierno local que colabora estrechamente con organizaciones no gubernamentales para poner de relieve la prevención del delito y la colaboración, describe el sistema de "justicia comunitaria" que funciona en el Condado de Deschutes, en Oregón.

CONSIDERE LAS SIGUIENTES circunstancias. Una noche, luego de trabajar hasta tarde, usted alcanza a tomar el último autobús. Luego de bajar del autobús en la parada acostumbrada, usted comienza a caminar hacia su casa. Al acercarse a su casa, observa una situación perturbadora. Oye a un grupo de niños que lloran. Están de pie junto a una mujer que yace sobre la acera. Cuando usted corre hasta allí, nota lo que parece ser una figura masculina que se escurre entre las sombras hacia el callejón. ¿Qué haría usted?

Les he planteado esta pregunta a millares de ciudadanos en docenas de estados norteamericanos. La respuesta es constante. Primero, usted atiende a la mujer, verifica sus signos vitales y determina la naturaleza de sus lesiones. Segundo, observa los niños para averiguar si ellos también han sido agredidos. Tercero, recurre a un vecino para que llame al número telefónico de ayuda de emergencia



Dennis Maloney

apropiado y despache a la policía para que ubique y arreste al delincuente. Esta secuencia, atender a la víctima del crimen, tomarle el pulso a la comunidad circundante y, luego, ocuparse del delincuente, parece ser un protocolo norteamericano en respuesta a un delito.

Fallas del sistema

Si ésta es, en realidad, la serie de acciones que se emprenden en el momento en que ocurre el crimen, ¿por qué la justicia penal estadounidense parece adherirse a un protocolo que es virtualmente opuesto? En Estados Unidos establecemos servicios legales, financiados por el gobierno, en beneficio del delincuente, le proporcionamos consejo e intervenciones terapéuticas y, aun después de encarcelarlo, le proveemos amplios servicios educativos y vocacionales. Entre tanto, las víctimas del crimen languidecen mientras se las entienden por sí mismas con sus traumas. En consecuencia, el público norteamericano ha llegado a la con-

clusión de que el sistema de justicia penal se ha vuelto tan concentrado en el delincuente que, en esencia, nos hemos convertido defensores del delincuente. Muchos hasta nos perciben como defensores del delincuente a expensas de la víctima y de las necesidades de la comunidad. Esta paradoja no debería aceptarse nunca, y nunca lo será.

El sistema estadounidense ha dependido del encarcelamiento como el medio preferido y, en muchos casos, el único de hacer que los delincuentes sean responsables de su comportamiento. Hay pruebas crecientes de que podemos imprimir más profundamente en el delincuente los efectos personalizados de su comportamiento si involucramos a la víctima en todo el procedimiento. Esto, a su vez, puede despertar en el delincuente un sentido mucho más profundo de responsabilidad.

Reconozcamos en primer lugar que las cárceles ocupan un lugar indiscutible para controlar a los delincuentes peligrosos durante las deliberaciones antes del juicio y, subsecuentemente, para castigar a esos delincuentes por sus actos perversos. Estos criminales requieren que se los coloque en prisiones seguras durante largos períodos. Pero es necesario recordar también que una gran cantidad de víctimas sufren pérdidas materiales a manos de delincuentes que no presentan una tendencia demostrada hacia la violencia. Estos delitos incluyen actos tales como el robo, el allanamiento de morada, el vandalismo y el giro de cheques sin fondos. Estos delitos representan el 90 por ciento de todos los que se cometen en Estados Unidos. En estos casos puede ser más satisfactorio y,

por cierto, menos costoso, hacer que el delincuente sea directamente responsable ante la víctima y la comunidad.

Esto puede lograrse permitiéndole a la víctima determinar un nivel apropiado de restitución, identificar una cantidad significativa de servicio de trabajo comunitario y, con la ayuda de un mediador entrenado, hacer arreglos para que la víctima le exprese al delincuente, cara a cara, el trauma que sufrió como resultado del delito.

De hecho, si el sistema de justicia penal reservara el espacio que hay en las prisiones para los delincuentes peligrosos que causan daños personales a otros y para aquellos delincuentes crónicos e imparables que cometen delitos contra la propiedad, podríamos tomar lo que ahorraríamos y proveerles a las víctimas amplios y muy necesarios servicios de tratamiento. Podríamos también financiar enfoques viables de prevención del delito, por mucho la mejor manera de impedir que haya víctimas.

Esto nos lleva a un tercer elemento del sistema de justicia penal estadounidense: la prevención del delito. Tenemos un sistema con la información más abarcadora que haya disponible en lo que respecta a lugares, ocasiones, frecuencia y patrones de la actividad delictiva. Pero si examinamos los recursos dedicados a prevenir el delito, encontramos que hay amplia oportunidad de mejorar. Así como el sistema, en su mayor parte, le presta tradicionalmente poca atención a la víctima, también le ha prestado demasiado poca atención a una verdadera discusión en torno a la prevención del delito. El sistema se ocupa primordialmente del

movimiento de los delincuentes, dependiendo a menudo de respuestas muy costosas. Este enfoque, opinan algunos, es miope.

Justicia comunitaria

En el Condado de Deschutes, en Oregón, y en un puñado de otras jurisdicciones en Estados Unidos, un grupo de funcionarios judiciales ha formado equipo con funcionarios locales elegidos, representantes legislativos y ciudadanos particulares para identificar las deficiencias del sistema y, lo que es más importante, para construir un sistema de justicia penal mejor, un sistema que hemos llegado a reconocer como la "justicia comunitaria".

Dentro de la estructura judicial de una comunidad, a la víctima se la considera el principal "cliente" del sistema de justicia, a los delincuentes se los hace responsables de modos constructivos y significativos, y a la prevención del delito se le asigna una prioridad elevada. La participación del ciudadano en la atención de las necesidades de las víctimas, la determinación de prioridades, la mediación en los requerimientos de restitución y la supervisión de los proyectos de servicio de trabajo comunitario son de primera importancia en la estrategia de justicia de una comunidad. Los funcionarios del sistema judicial recalcan con mucho cuidado que este cambio es posible mientras permanecen invariables los requisitos del debido proceso de ley.

El Condado de Deschutes ha tomado varias medidas para demostrar que procede con seriedad respecto de su nueva visión del sis-

tema judicial. Luego de una serie de reuniones convocadas por el juez presidente del Tribunal de Circuito, Stephen Tiktin, en relación con la necesidad de que el sistema de justicia local realizara los servicios a las víctimas y la prevención del delito, el condado aprobó una "resolución oficial" para responder al liderato del grupo. Esta resolución, a su vez, acicateó una serie de acciones que han hecho avanzar rápidamente el sistema hacia un modelo de justicia comunitaria.

He aquí algunos ejemplos de ideas que se han puesto en práctica desde la aprobación de la resolución:

Mejor atención a las víctimas

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Deschutes ha desarrollado un complemento completo de servicios a las víctimas. El departamento atiende las necesidades de las víctimas desde el momento en que se informa sobre el crimen hasta el momento en que se hace el último pago de restitución. Este programa de ayuda a las víctimas sigue el patrón del "código" estadounidense de emergencias hospitalarias. Los delitos en que una persona es víctima de actos de violencia se clasifican en el código azul, y el programa asegurará que la víctima tenga a su lado un voluntario de apoyo a los pocos minutos de recibida una llamada. A los delitos de menos gravedad se les da una respuesta en cuestión de horas, y en un par de días, luego de recibido el informe, se entra en contacto con las víctimas de delitos menores. Las víctimas reciben también otros servicios, tales como consejo en casos de trauma, alojamiento temporal de ser necesario, información y ayuda legal en regis-

trar las pérdidas. Las víctimas del crimen reciben un mensaje claro: "Usted es un miembro honesto de nuestra comunidad; usted ha sido agraviado, y es nuestra tarea hacer todo lo podemos para asegurar que se le restaure en la mayor medida posible. Estaremos de su lado hasta que recupere una sensación de seguridad".

El Tribunal de Circuito de Deschutes ha impulsado una gama completa de oportunidades para que las víctimas se involucren directamente en el proceso judicial. El tribunal le ha dado una prioridad particularmente alta a los servicios de mediación entre víctima y delincuente. De acuerdo con este enfoque, las víctimas pueden optar por enfrentarse cara a cara con los delincuentes para explicarles las consecuencias humanas de sus pérdidas, manifestar su necesidad de recuperar pérdidas financieras y determinar los requerimientos apropiados de servicios comunitarios. Voluntarios sumamente entrenados hacen más fácil la sesión. El Departamento de Justicia Comunitaria, formado recientemente, coordina el programa para el tribunal. Los primeros resultados de esta estrategia son muy alentadores. Las víctimas dan cuenta de un nivel de satisfacción mucho más alto con la mediación que con los procesos judiciales tradicionales. Y los acuerdos a que se llega son mucho más durables que las órdenes corrientes de libertad condicional. Los delincuentes pagan restitución a una tasa mucho más elevada, que se acerca al 90 por ciento, en comparación con el promedio nacional de libertad condicional de apenas el 33 por ciento.

El Departamento de Justicia Comunitaria convierte posturas que en una ocasión se concentraban en ofrecerles consejo a los delincuentes, en otras que recalcan el apoyo y el consejo a las víctimas. El viejo sistema preguntaba en cada caso de aplicación de la ley: "¿En qué condiciones está el delincuente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué servicios se requieren para cambiar su comportamiento?". El nuevo sistema pregunta: "¿Cuál es la situación de la víctima? ¿De qué grado son sus padecimientos? ¿Qué tiene que hacer el delincuente para compensar a la víctima?"

El departamento sigue administrando y supervisando el comportamiento del delincuente. Pero el contexto primordial de la supervisión tiene que ver con la responsabilidad del delincuente de restituir a la víctima y pagar la restitución. La responsabilidad, y no el consejo, es la prioridad máxima de la supervisión del delincuente.

Una manera más creativa de abordar los delitos contra la propiedad

La comunidad empresarial del Condado de Deschutes ha unido fuerzas con el Departamento de Justicia Comunitaria para formar lo que ha llegado a conocerse como la Junta de Rendición de Cuentas al Comerciante. La junta se ha formado por varias razones:

- El hurto en las tiendas, el robo al por menor y los cheques sin fondos le imponen un costo terrible a los comerciantes de la zona, costo que en algunos casos amenaza la viabilidad de algunas empresas pequeñas.
- La Oficina del Fiscal de Distrito llegaba a

un punto donde apenas podía permitirse llevar ante la justicia el gran número de casos, ya que cada encausamiento le costaba al presupuesto del departamento de 600 a 900 dólares en honorarios de abogados y otros costos de personal. El costo era el mismo si la cantidad de dinero robado era grande o pequeña.

- Los comerciantes, aun cuando apoyaban el Programa de Mediación entre Víctima y Delincuente, no disponían de tiempo para pasar por el proceso de mediación en todos los casos.

Como resultado de estas circunstancias, los comerciantes organizaron un programa en el que uno de ellos actuaría como víctima sustituta en una docena de casos y determinaría el nivel de restitución apropiado. De esta manera, se maneja el caso sin necesidad de un enjuiciamiento costoso, el comerciante víctima tiene una oportunidad de hacerles sentir a los rateros de tienda y a los ladronzuelos la gravedad de lo que le hacen a la familia de las pequeñas empresas, y los comerciantes reciben su restitución con más rapidez, y a una tasa más elevada, que a través de los procedimientos judiciales tradicionales.

Construcción de comunidades más viables

Uno de los cambios destacados que han ocurrido debido al compromiso del departamento con la justicia comunitaria es que ahora se considera a la sentencia de servicio a la comunidad como un recurso para construir comunidades más viables. El servicio a la comunidad se ha usado tradicionalmente como medida punitiva. En el Condado de Deschutes, de acuerdo con la filosofía general de la justicia comunitaria, el

servicio de trabajo se considera un medio de restituirles a las víctimas y la comunidad.

Dentro de este contexto, el departamento ha colaborado diligentemente con agencias comunitarias sin fines de lucro para abordar una gama de proyectos innovadores. Estos incluyen:

- entrar en sociedad con un Club Rotario local para ayudar a construir un centro para niños víctimas de abuso;
- unir fuerzas con una agencia local contra la pobreza para ayudar a recaudar dinero destinado a un alojamiento de transición consistente en 70 unidades;
- trabajar para construir un parque comunitario en honor de un ex educador comunitario; y
- desarrollar una relación formal con Habitat for Humanity (organización que construye viviendas para personas de escasos recursos), en la que los delincuentes han construido viviendas con los auspicios de esa organización.

Con este enfoque, la comunidad del departamento recibe beneficios tangibles y los delincuentes comienzan a forjar un vínculo con la comunidad, reduciendo en consecuencia la probabilidad de que cometan actos de vandalismo. La comunidad ha demostrado apoyo abrumador a este enfoque.

Estrategias de prevención

Esta cuestión puede muy bien haber inspirado el modo de pensar más creativo del condado. Al analizar el sistema de corrección juvenil del estado, el condado determinó que Oregón, por

inadvertencia, creó un incentivo para que los condados usen las instalaciones de corrección estatales. En Oregón los condados no pagan nada por usar las instituciones estatales, de modo que, en esencia, los condados pueden optar por colocar a los delincuentes juveniles, molestos pero no necesariamente peligrosos, en las instalaciones de corrección estatales. No es sorprendente que haya y, probablemente, siempre habrá presión a favor de ampliar las instituciones juveniles para alojar a los delincuentes juveniles de los condados. Si bien aparentemente esto parece ser financieramente beneficioso para los gobiernos de los condados, sólo sirve para empujar hacia arriba la población y los costos de las prisiones, con lo que amenaza otros servicios estatales esenciales, tales como la educación.

El Condado de Deschutes y la Administración de Asuntos Juveniles de Oregón elaboraron una manera de revertir esta tendencia. El condado ofreció cambiar a una base de subsidios en bloque según la cual podía administrar sus propias instalaciones para delincuentes juveniles no peligrosos que, de otro modo, habrían sido colocados en instituciones estatales. Los programas locales se pagan con fondos procedentes de los subsidios en bloque, con el acuerdo de que cualquier ahorro puede reinvertirse en estrategias de prevención del delito. Y el ahorro puede ser significativo, tanto como varios centenares de miles de dólares al año. Una Comisión de ciudadanos para Niños y Familias administra el dinero. Estos ciudadanos aportan al programa una fuerte perspectiva empresarial, y hacen diferencias claras entre gastos e inversiones. Este enfoque innovador ganó el apoyo de la legislatura estatal y del gobernador John A. Kitzhaber.

Si este programa da resultados y se extiende a otros condados, Oregón saldrá ganando de dos maneras. La actual población carcelaria puede, por lo menos, disminuir, y los dólares que una vez se destinaron a costosas operaciones carcelarias pueden reinvertirse en estrategias comunitarias de prevención del delito.

Estos son apenas unos pocos ejemplos de los esfuerzos emprendidos desde que se inició la iniciativa de justicia comunitaria. Al involucrarse más los ciudadanos y las víctimas, hay disponible una inagotable energía creativa para transformar el sistema de justicia penal en un sistema de justicia comunitaria.

Es evidente que la justicia comunitaria responde en primer término a las necesidades de las víctimas, ofrece soluciones creativas para responsabilizar a los delincuentes no violentos y destaca la prevención del delito como un aspecto impor-

tante de las actividades diarias del sistema de justicia penal. La participación activa de los ciudadanos en todos los aspectos del sistema judicial es un elemento central de esta filosofía. Esta participación ciudadana sirve para expandir el sentido de responsabilidad con miras a conseguir comunidades más seguras, mucho más allá de los profesionales del sistema de justicia. Con este nuevo sentido de pertenencia y responsabilidad, los ciudadanos aportarán gustosa energía y recursos que nunca han estado disponibles a través de medios financiados con el dinero de los contribuyentes. Armados de una nueva filosofía y equipados con liderazgo y recursos provistos por los mismos ciudadanos, el futuro aparece más brillante y seguro para aquellos lugares que van en procura de la justicia comunitaria.

Temas de la Democracia, Volumen 6, Número 1, julio de 2001

Resolución sobre Justicia Comunitaria

RESOLUCIÓN N° 96-122

POR CUANTO los ciudadanos del Condado de Deschutes deben tener derecho al más alto nivel de seguridad pública ;

POR CUANTO las crecientes tasas de delincuencia juvenil y adulta plantean una amenaza a la condición y sensación de seguridad de nuestros ciudadanos, y

POR CUANTO una estrategia general de reducción del delito requiere hacer hincapié, de manera equilibrada, en la prevención del delito, la intervención temprana y los esfuerzos de corrección efectivos, y

POR CUANTO la Justicia Comunitaria encarna una filosofía que involucra a la comunidad para liderar todas las estrategias de prevención y reducción del delito;

Por tanto, la Junta de Comisionados del Condado de Deschutes adopta la Justicia Comunitaria como la misión y propósito centrales de los esfuerzos de corrección comunitarios del condado. Además, el

condado crea por la presente un Departamento de Justicia Comunitaria para reemplazar el Departamento de Corrección Comunitaria.

SE RESUELVE que el Departamento de Justicia Comunitaria trabajará en asociación con la ciudadanía del condado para llevar a cabo iniciativas efectivas de prevención del delito, control del delito y reducción del delito.

SE RESUELVE, ADEMÁS, que el condado construirá un Centro de Justicia Comunitaria para proveer servicios y programas para que se restituya a las víctimas del delito, para que los delincuentes se responsabilicen y ganen las competencias para convertirse en ciudadanos responsables y productivos, y para que la comunidad tenga acceso un centro organizativo de la amplia gama de esfuerzos de lucha contra el crimen.

DADO EN ESTE 25to. día de septiembre de 1996 por la Junta de Comisionados del Condado de Deschutes (Oregón, Estados Unidos de América).

Los Muchachos de Scottsboro y los Derechos Fundamentales

Por David Pitts

Este año se cumplen 70 años del juicio que mantuvo absorto al país durante casi cuatro lustros. El caso los Muchachos de Scottsboro contra el Estado de Alabama se convirtió en una causa célebre, fue uno de los principales precursores del movimiento de los derechos civiles de Estados Unidos y culminó en dos dictámenes trascendentales del Tribunal Supremo que reforzaron los derechos fundamentales de todos los estadounidenses. El caso sirvió también para recordar una vez más que los derechos consagrados en constituciones escritas rara vez se traducen en realidades inmediatas, sino que evolucionan a lo largo del tiempo con arreglo a la interpretación y el examen judiciales. Nuestro colaborador David Pitts analiza el significado de los dictámenes del Tribunal Supremo en el artículo siguiente. También ha visitado Scottsboro para hablar con el alcalde y preguntarle qué cambios se han producido en la ciudad desde la celebración de los primeros juicios en 1931.

EN MARZO DE 1931, nueve jóvenes negros, de 13 a 21 años, que viajaban en un vagón de mercancías descubierto por los campos de Alabama, fueron encarcelados y juzgados, acusados de haber violado a dos mujeres blancas: Ruby Bates y Victoria Price, que también viajaban en el mismo tren. El lugar era Scottsboro, pequeña y hasta entonces poco conocida ciudad, que iba a dar nombre a una de las más famosas causas de derechos civiles de la historia de Estados Unidos, en la que se mezclaban racismo, estereotipos y tabúes sexuales en el marco de un Sur estrictamente segregado. Ocho de los nueve jóvenes fueron rápidamente declarados culpables y sentenciados a muerte. Roy Wright, que no tenía más que 13 años, se libró de la pena capital.

El juzgado donde se celebraron los primeros juicios todavía está en pie en el centro de la ciudad, aunque un residente se apresuró a recordar a un visitante que los juicios siguientes se trasladaron a otros lugares de Alabama. La mayoría de las personas entrevis-



El juzgado de Scottsboro hoy.

Foto cortesía del autor.

tadas apenas tienen una idea vaga de lo que sucedió aquí hace setenta años. Un anciano explicó "Yo era un muchacho cuando empezaron los juicios. Recuerdo vagamente oír a mis padres hablar de ello. Fue más tarde cuando me di cuenta que un acontecimiento importante había sucedido en esta misma ciudad. Pero no me di cuenta de ello hasta que los derechos civiles se convirtieron en una causa sensacional".

La importancia del caso

La historia de los Muchachos de Scottsboro es importante no sólo en la historia de los derechos civiles, sino también en la evolución del derecho constitucional, ya que fue el caso que dio lugar a una interpretación mucho más

amplia de la garantía de la 14ta. enmienda de "igualdad de protección ante la ley" y de las "debidas garantías procesales". El caso también amplió el alcance de la garantía de la sexta enmienda del derecho de un acusado a "asistencia de abogado". Concretamente, el caso dio por resultado una garantía de derecho a tener asistencia de un abogado para todos los estadounidenses en todos los casos penales, estatales o federales, y la prohibición de excluir de los jurados a ningún grupo racial o étnico.

La sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos incluye varios derechos para asegurar un juicio imparcial a los acusados en causas



penales. Una de las principales disposiciones es el derecho a estar representado por un abogado. No obstante, a lo largo de casi toda la historia de la República, el derecho a abogado había estado limitado a quienes podían permitírselo económicamente y también a los delitos sobre los que tenía jurisdicción el gobierno federal. Esto cambió con el caso de los Muchachos de Scottsboro, que estaban acusados de infringir el derecho estatal, no federal, y eran tan pobres que apenas podían subvenir a sus necesidades básicas, mucho menos pagar un abogado que los representase. Finalmente se les asignaron dos abogados, pero eran totalmente inadecuados. Uno de ellos era un abogado especializado en bienes raíces en Tennessee, que estuvo ebrio durante todas las actuaciones. El otro, un abogado local que no había llevado un caso en décadas.

Cuatro de los nueve Muchachos de Scottsboro con Samuel Leibowitz, uno de los abogados del caso. De izquierda a derecha, Willie Robertson, Eugene Williams, Leibowitz, Roy Wright y Olen Montgomery. AP Photo.

El primer dictamen transcendental del Tribunal Supremo

En un dictamen transcendental, emitido en el caso de Scottsboro, Powell contra Alabama (1932), del nombre de uno de los acusados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró que a los inculcados indigentes acusados de delitos capitales se les tenía que asignar un abogado apropiado. El Tribunal basaba su decisión principalmente en la cláusula sobre garantías procesales de la 14ta. enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Al revocar las sentencias de muerte, el Tribunal determinó, por mayoría, que la defensa de los Muchachos

de Scottsboro había sido, en el mejor de los casos, inadecuada. El dictamen del Tribunal Supremo establecía que la asistencia de abogado era "fundamental" para las garantías procesales en casos de esta gravedad, en tribunales estatales o federales.

"Al revocar las condenas", afirma Donald Lively en su obra *Landmark Supreme Court Decisions* (Dictámenes Transcendentales del Tribunal Supremo), "el Tribunal Supremo estableció que la complejidad de un juicio penal impone el derecho a la presencia de un abogado". Aunque *Powell contra Alabama* fue una decisión limitada, por cuanto que se aplicaba sólo a los casos capitales, los especialistas en derecho constitucional aseguran que ha tenido un efecto considerable en la jurisprudencia estadounidense, ya que por primera vez se estableció el derecho a la asistencia de abogado, no sólo en los tribunales federales, sino también en los estatales.

Además, como se indica en el *Diccionario de Derecho Constitucional de Estados Unidos*, "ligó la cláusula sobre asistencia de abogado de la sexta enmienda a los estados a través de la cláusula sobre garantías procesales de la 14ta. enmienda, aunque (hasta entonces) sólo en relación con los casos capitales en la etapa del juicio oral". El significado del dictamen también lo han subrayado Maureen Harrison y Steve Gilbert en su libro *Landmark Decisions of the United States Supreme Court* (Dictámenes Transcendentales del Tribunal Supremo de Estados Unidos). "Desde el principio", escriben, "nuestras constituciones y leyes estatales y nacionales han concedido especial importancia a las salvaguardias procesales y

substantivas destinadas a garantizar juicios justos ante tribunales imparciales, en los que cada inculpado reciba igualdad de trato ante la ley".

El segundo dictamen transcendental del Tribunal Supremo

Alabama, no obstante, se negó a ceder y abrió de nuevo el caso Scottsboro, incluso después de que los médicos que habían examinado a las mujeres certificaron que no había habido violación, e incluso cuando Ruby Bates se retrató, un mes antes del comienzo de los nuevos juicios. Una vez más se dictaron sentencias de muerte en el caso de dos de los inculpados: Heywood Patterson y Clarence Norris. Un segundo dictamen transcendental del Tribunal Supremo de Estados Unidos: *Norris contra Alabama* (1935), revocó de nuevo las sentencias de muerte, esta vez porque Alabama había prohibido la participación de afroamericanos en los jurados. La decisión unánime mencionó "la exclusión invariable y general de los negros" de los jurados y calificó de "violenta osadía" la idea apuntada por algunos de que los afroamericanos no reunían las condiciones necesarias para formar parte de los jurados.

En un comentario sobre la importancia del fallo en el caso de Norris, *The Oxford Guide to U.S. Supreme Court Decisions* (Guía Oxford de los dictámenes del Tribunal Supremo de Estados Unidos) dice que el Tribunal Supremo mantuvo "que la exclusión sistemática de afroamericanos del gran jurado y del jurado del juicio, negaba a los acusados afroamericanos en los tribunales estatales (de Alabama) la protec-

ción igual de la ley garantizada por la 14ta. enmienda". De hecho, se les negaba un juicio justo por un jurado imparcial, según alega James Goodman en su celebrado libro *Stories of Scottsboro* (Historias de Scottsboro). En una decisión unánime, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo el argumento de la defensa, de que los negros habían sido excluidos de manera arbitraria y sistemática de las listas de jurados de Alabama en violación de la cláusula de protección igual de la 14ta. enmienda".

Pese a los dos dictámenes del Tribunal Supremo de Estados Unidos contra la parte acusadora, el estado de Alabama insistió en celebrar nuevos juicios. Finalmente, cinco de los jóvenes fueron declarados culpables y cumplieron largas condenas de prisión; el último de ellos fue excarcelado en 1950. Los otros cuatro fueron puestos en libertad. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos no pudo librar de la cárcel a cinco de los Muchachos de Scottsboro, sí impidió que fueran ejecutados. Desde el punto de vista constitucional, la importancia del caso es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se había comprometido al derecho a la asistencia de abogado, al menos en los casos punibles con la pena capital. También había advertido que no se toleraría la exclusión de ciudadanos de los jurados por motivos de raza. La decisión *Norris contra Alabama* de 1935 dio por resultado la abolición de los jurados integrados exclusivamente por blancos en todo el Sur, aunque para ello tuvo que pasar algún tiempo.

Otras decisiones posteriores del tribunal

Con respecto a la decisión emitida en el caso *Powell contra Alabama*, dictámenes posteriores del Tribunal Supremo reforzaron la garantía del dere-

cho a abogado. En el caso de *Johnson contra Zerbst* (1936), el Tribunal Supremo del país declaró que todos los inculcados de delitos graves en tribunales federales tenían que contar con asistencia de abogado. Anteriormente (desde 1790), sólo los reos de delitos punibles con la pena capital ante un tribunal federal tenían que contar con abogado. En los años cuarenta, el Tribunal extendió este derecho a los encausados en tribunales estatales por delitos menos graves que los que se habían imputado a los Muchachos de Scottsboro. Muchos tribunales supremos estatales también exigieron la asistencia de abogado, en particular en casos de delitos penales graves.

No obstante, en 1963 todavía quedaban siete estados donde no era obligatorio asignar abogado a todos los inculcados de delitos estatales graves. El Tribunal Supremo uniformó la legislación de todo el país con su decisión en el caso de *Gideon contra Wainwright* (1963), por la que se aplicaba el derecho a abogado enunciado en la sexta enmienda a todos los tribunales federales y estatales en casos de delitos graves. "El derecho de un acusado de un crimen a disponer de abogado puede que no se considere fundamental y esencial para un juicio imparcial en algunos países", declaraba el magistrado Hugo Black, "pero en el nuestro lo es".

Esta decisión puso término a una de las historias más espectaculares del derecho constitucional de Estados Unidos — de la que se da cuenta detalladamente en el libro *Gideon's Trumpet*, (La Trompeta de Gideon) publicado en 1964. "Gideon es una decisión de extraordinaria importancia", afirman Lee Epstein y Thomas Walker en su obra frecuentemente citada *Constitutional Law for a Changing America* (Derecho constitucional

para una Norteamérica en cambio). Llevó la "representación legal a una clase de acusados que hasta entonces no habían disfrutado de los servicios de abogado".

Decisiones posteriores emitidas por el Tribunal Supremo a finales de los años sesenta, y sobre todo a principios de los años setenta, ampliaron el derecho universal a abogado establecido en 1963. En 1972, el Tribunal estableció que este derecho se aplicaba no sólo a los acusados de delitos graves con arreglo al derecho estatal y federal, sino también a todos los acusados de delitos punibles con pena de prisión. El país había recorrido un largo camino desde que nueve jóvenes afroamericanos comparecieron llenos de temor en un caluroso y polvoriento juzgado de Alabama en la primavera de 1931, donde se iba a decidir su destino.

Sin embargo, la intervención del Tribunal Supremo en el caso de los Muchachos de Scottsboro dio lugar a una serie de importantes decisiones que reafirmaron los derechos fundamentales de todos los estadounidenses y garantizaron que este tipo de drama racial pasara a la leyenda, no sólo en la historia de los derechos civiles sino también en la larga evolución de la jurisprudencia del país. Es un caso que desató fuertes pasiones y acalorados debates en los años treinta y que todavía tiene repercusiones en nuestra propia época al afirmar el principio de igualdad de protección ante la ley.

Temas de la Democracia, Volumen 6, Número 1, julio de 2001

Los datos del caso

El 31 de marzo de 1931, nueve jóvenes afroamericanos fueron condenados en Scottsboro, Alabama, acusados de haber violado a dos jóvenes blancas en un vagón de ferrocarril de mercancías. Los médicos que examinaron a las jóvenes después del supuesto delito, declararon que no había habido violación. Pese a este testimonio, ocho de los nueve Muchachos fueron condenados y sentenciados a muerte por el tribunal del estado. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en sus decisiones Powell contra Alabama (1932) y Norris contra Alabama (1935) revocó las condenas y penas de muerte dictadas en los tribunales locales — en el primer caso, porque los acusados no habían recibido asistencia adecuada y en el segundo, porque se había excluido a los negros de los jurados.

No obstante, entre 1935 y 1937 continuaron los enjuiciamientos en el caso. Cuatro de los inculpados fueron condenados de nuevo y sentenciados a largas penas de cárcel. Los cargos que pesaban sobre los cuatro restantes fueron retirados. Andy

Wright fue el último en salir de la cárcel, en 1950; 19 años, dos meses y 15 días después de haber pasado su primera noche en la cárcel. El presunto cabecilla del grupo, Heywood Patterson, se fugó de la cárcel en 1948 y se refugió en el estado de Michigan, donde no existía la segregación obligatoria. El gobernador de Michigan se negó a entregar a Patterson a Alabama. Patterson publicó su libro *Scottsboro Boy* (Muchacho de Scottsboro), cuando era fugitivo. Murió de cáncer en 1952, a la edad de 39 años.

Ozzie Powell y Clarence Norris, cuyos nombres figuraban en las dos decisiones trascendentales del Tribunal Supremo de Estados Unidos, obtuvieron la libertad condicional en 1946. Treinta años después, Norris pidió y consiguió el indulto incondicional, que le concedió el entonces gobernador de Alabama George C. Wallace. En principio, Wallace había sido partidario de las leyes de segregación del estado, pero para el decenio de 1970, la segregación obligatoria había sido rechazada en Alabama y el gobernador estaba tratando de corregir antiguos

yerros. En 1979, Norris publicó un libro sobre la dura prueba a la que se vio sometido, titulado *The Last of the Scottsboro Boys* (El último de los muchachos de Scottsboro). Último superviviente del grupo, falleció en 1989.

Durante los años treinta, grupos muy diversos se erigieron en campeones de la causa de los Muchachos de Scottsboro, incluso el Partido Comunista Norteamericano y la Asociación Nacional pro Avance del Pueblo de Color (NAACP), la organización de derechos civiles más antigua del país. Pero la mayoría de los acusados consiguió finalmente la libertad gracias a la labor del Comité de Defensa de Scottsboro, en el que estaban representados estadounidenses de todos colores. Los historiadores han visto en las manifestaciones y concentraciones que se organizaron en apoyo de los Muchachos de Scottsboro un precursor importante del moderno movimiento en pro de los derechos civiles, que se inició a comienzos de los años cincuenta. Las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo como resultado del caso están consideradas hitos que ampliaron considerablemente los derechos fundamentales de la población afronorteamericana; y, en realidad, de todos los estadounidenses.

El Scottsboro de hoy

Siete decenios más tarde — las calles de Scottsboro, no se encuentran indicios de la segregación inflexible que debe haber parecido inquebrantable a principios de los años treinta. El alcalde, Ron Bailey, quiere que los visitantes sepan que Scottsboro, una comunidad de apenas unos 15.000 habitantes, es hoy un lugar muy distinto de lo que era entonces. "Ahora nuestra ciudad está totalmente integrada; la mayor parte de nuestra población ni siquiera había nacido cuando se celebraron aquí los primeros juicios", nos explica. "Es preciso juzgar los acontecimientos de 1931 a la luz de las costumbres de aquel tiempo", añade. "En 1931, todavía vivían en esta ciudad personas que recordaban la Guerra Civil. Alabama se recuperó mucho más despacio que otras zonas del Sur, en los aspectos económico y de otro tipo".

"Es importante recordar lo que sucedió en esta ciudad en 1931, pero podría haber sucedido en muchos lugares en aquel tiempo", señala Bailey. "Scottsboro ha cambiado desde entonces y también ha cambiado el Sur. El Scottsboro de hoy es progresista en cuestiones raciales. Probablemente tenemos un mayor porcentaje de matrimonios y relaciones interraciales que ningún otro lugar de Alabama. Y hoy nuestra ciudad ya no es sólo negra y blanca, sino multirracial. Por ejemplo, tenemos un creciente porcentaje de asiáticos e hispanos. Las relaciones raciales en Scottsboro son ahora como las de cualquier otro lugar del país. La cosas aquí no son perfectas, pero hemos recorrido un largo camino".

B i b l i o g r a f i a

Artículos y libros sobre la justicia penal de Estados Unidos

Barnes, Patricia G.

CQ'S Desk Reference on American Criminal Justice: Over 500 Answers to Frequently Asked Questions from Law Enforcement to Corrections. Washington, D.C.: CQ Press, 2001.
Features answers to over 500 frequently asked questions about the U.S. legal system. Reference materials include significant laws and court decisions, and a glossary of common legal terms.

Boyer, Peter J.

"Annals of Justice: DNA on Trial," *New Yorker*, January 17, 2000, pp.42–53.
Makes the case that not all DNA laboratories and technicians are created equal, and emphasizes the primary role played by human advocates in the criminal justice process, even with the presence of scientific data.

Champion, Dean J.

Dictionary of American Criminal Justice: Key Terms and Major Supreme Court Cases. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1998.
An up-to-date dictionary of terms used in the criminal justice field and an annotated alphabetic compilation of important U.S. Supreme Court cases addressing criminal justice make up this volume, which includes a subject index of cases.

Cowan, Catherine

"States Revisit the Death Penalty," *State Government News*, vol. 44, no.5, May 2001, pp. 12–17.
Legislators have proposed suspending or abolishing the death penalty in more than 20 states. Cowan details several cases where the system failed, and notes that while according to a public-opinion survey the majority of Americans support capital punishment, they are divided over whether it is administered evenly.

**Crump, David and
George Jacobs**

A Capital Case in America: How Today's Justice System Handles Death Penalty Cases, from Crime Scene to Ultimate Execution of Sentence. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2000.
Describes what happens in a capital case from "the offense and the arrest" to "the aftermath," examining the process from beginning to end and analyzing specific cases.

"DNA Testing and Capital Punishment: Technology from the Crime Scene to the Courtroom." *Congressional Digest*, November 2001, pp. 257 – 265.
This issue is devoted to the growing phenomenon of DNA testing and its repercussions for prisoners on death row. Articles focus on technology, the U.S. prison population, state and federal death penalties, and legislative background.

**DeVore, Donald and
Kevin Gentilcore**

"Balanced and Restorative Justice and Educational Programming for Youth At-Risk," *The Clearing House*, vol. 73, no. 2, November 1999, p. 96.

Discusses Montgomery County, Pennsylvania's, implementation of the "Balanced and Restorative Justice" (BAR J) educational model for youth at-risk. This model replaces more traditional punishment or treatment methods with emphasis on a balanced triangle of goals: community safety, accountability and competency development.

Edwards, Todd

"Sentencing Reform in Southern States: A Review of Truth-in-Sentencing and Three-Strike Measures." *Spectrum: The Journal of State Government*, September 22, 1999, vol. 72, no.4, page 8.

Discusses and provides statistical data on the effects of sentencing reform implemented by U.S. states within the Southern Legislative Conference.

**Fagan, Jeffrey and
Franklin E. Zimring, eds.**

The Changing Borders of Juvenile Justice: Transfer of Adolescents to the Criminal Court. University of Chicago Press, 2000.

Contains a collection of essays that address the policy of trying and punishing American youths as adults, the boundaries of juvenile court, and the developmental and psychological aspects of the current policy.

Franklin, Carl J.

Constitutional Law for the Criminal Justice Professional. Boca Raton, FL: CRC Press, 1999.

Designed to be both an educational and reference tool for professionals at all levels, this is a study of the most dramatic and significant areas in U.S. constitutional law. Focuses on topics such as search and seizure, arrest and civil rights, due process and the judicial system.

Friedman, Lawrence

Crime & Punishment in American History. New York: Basic Books, 1993.

Written by an eminent Stanford University Law School professor, this panoramic history of the American criminal justice system looks at crime and punishment in America, from the Salem witchcraft trials in the 17th century to the trials of four Los Angeles police officers in the Rodney King beating case in the early 1990s.

Henderson, Harry

Capital Punishment. New York: Facts on File, 2000.

An encyclopedic collection of information on capital punishment, covering many of the debates from several perspectives.

Kadish, Sanford H., ed.

Encyclopedia of Crime and Justice. New York: Free Press, 1983.

One of the most significant criminal justice encyclopedias today, this volume contains articles with accompanying bibliographies that provide information on concepts, theories, principles and research related to criminal behavior and criminal justice legal issues.

Kurki, Leena

"Restorative and Community Justice in the United States," *Crime & Justice*, vol. 27, Spring 2000, pp. 235–304.

Distinguishes between "restorative justice," which promotes healing and the rebuilding of relations among victims, offenders and their communities; and "community justice," which views crime as a social problem requiring the involvement of criminal justice agencies. Provides background for each movement and evaluates the success of respective projects.

Leighton, Paul

Criminal Justice Ethics. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

A collection of essays that examines how personal and moral beliefs influence the relationship between criminal justice and social justice. Included topics are “what should be a crime?” lawyers’ ethics, treatment of inmates, the death penalty and the moral foundations of criminal guilt.

Lewis, Anthony

Gideon’s Trumpet. New York: Vintage Books, 1989.

A history of the 1963 landmark U.S. Supreme Court case (*Gideon v. Wainwright*) follows James Earl Gideon’s fight for the right to legal counsel in criminal proceedings. Includes notes, table of cases leading up to the final verdict and an index.

Manfredi, Christopher P.

The Supreme Court and Juvenile Justice. University Press of Kansas, 1998.

Account of the U.S. Supreme Court’s role in shaping the history of American juvenile courts.

Palmer, Louis J., Jr.

Encyclopedia of Capital Punishment in the United States. Jefferson, NC: McFarland, 2001.

Comprehensive source of information on the legal, social and political history, and the present status of capital punishment in the U.S.

Paternoster, Raymond, Robert Brame,**Ronet Bachman and Lawrence W. Sherman**

“Do Fair Procedures Matter?” *Law and Society Review*, vol. 31, 1997, pp.163–204.

Results from the Milwaukee, Wisconsin, Domestic Violence Experiment show that when police acted in a procedurally fair manner in the arrest of assault suspects, the rate of subsequent domestic violence was significantly lower than when they did not.

Ryan, George and Frank Keating

“Is the Death Penalty Fair?” *State Government News*, vol. 44, no. 5, May 2001, pp. 10–11.

The governor of Illinois (Ryan) tells how wrongful convictions made him reassess the death penalty, while the governor of Oklahoma (Keating) maintains it can be fairly administered.

Schmallegger, Frank

Criminal Justice Today: An Introductory Text for the 21st Century, 6th ed. Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

Criminal Justice: A Brief Introduction, 4th ed. Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

The two textbooks above by Schmallegger look at the U.S. criminal justice system, and present overviews and analyses of crime, criminal law, policing, adjudication and corrections, as well as focus on juvenile justice, drugs and the future of criminal justice in the United States.

Sherwin, Richard K.

When Law Goes Pop: The Vanishing Line Between Law and Popular Culture. University of Chicago Press, 2000.

A legal theorist’s and former prosecutor’s appraisal of the impact of popular culture on the criminal justice system in the United States.

Sudo, Phil

“Five ‘little’ people who changed U.S. history; Supreme Court cases: *Dred Scott v. Sandford*, 1857; *Brown v. Board of Education*, 1954; *Gideon v. Wainwright*, 1963; *Miranda v. Arizona*, 1966; *Roe v. Wade*, 1973.” *Scholastic Update*, vol. 122, no. 10, January 26, 1990, p. 8.

Profiles five U.S. Supreme Court cases in which ordinary people profoundly influenced the course of justice in the United States.

Tyler, Tom R., et al

Social Justice in a Diverse Society.

Boulder, CO: Westview, 1997

Analysis of the existence of cross-cultural conceptions of justice, concluding with an optimistic picture of the possibility of the realization of justice within a multicultural society.

Tyler, Tom R.

"Social Justice: Outcome and Procedure,"

International Journal of Psychology, vol. 35,

2000, pp. 117-125.

Recent psychological research on social justice seems to indicate that people are more willing to accept procedural justice judgments when they feel that those judgments are made through decision-making procedures they view as fair. "Fairness" is evaluated by such criteria as neutrality and trustworthiness of authorities, and the degree to which authorities treat subjects with dignity and respect during the process.

Umbreit, Mark S.

"Restorative Justice Through Victim-Offender Mediation: A Multi-Site Assessment." *Western Criminology Review* vol.1, no.1. 1998

Report on studies in restorative justice, which concentrate on processes and results of several victim-offender mediation situations. Only available online at: <http://wcr:sonoma.edu/v1n1/umbreit.html>

Direcciones de Internet que tratan de temas de la justicia penal de Estados Unidos

Las opiniones expresadas en otros sitios de Internet que aquí se indican no representan necesariamente las opiniones del gobierno de Estados Unidos

Criminal Justice Links

<http://www.criminology.fsu.edu/cj.html>

A comprehensive array of resources, including organizations, cases, reports and much more.

Criminal Justice on the Web

<http://www.albany.edu/scj/links.htm>

The University at Albany's School of Criminal Justice in New York, sites links to many valuable information sources covering national and state laws, restorative justice, police and correctional institutions.

Criminal Justice, 2000 Volumes 1-4

<http://www.ojp.usdoj.gov/nij/pubs-sum/cj2000.htm>

The National Institute of Justice commissioned more than 60 criminal justice professionals to reflect on criminal justice research accomplishments, and analyze current and emerging trends in crime and criminal justice practice in the United States. The website contains the full-text articles.

Journal of Criminal Justice and Popular Culture

<http://www.albany.edu/scj/jcipc/index.html>

Published by the School of Criminal Justice, University at Albany (NY), this journal provides access to full-text articles, essays and reviews.

Federal Bureau of Investigation (FBI)

<http://www.fbi.gov/>

Provides access to the FBI's Uniform Crime Reports, congressional testimony, "most wanted" posters and crime alerts, as well as an "FBI for Kids" feature, among many other items.

National Criminal Justice Reference Service (NCJRS)

<http://www.ncjrs.org/>

NCJRS is a U.S. federally sponsored information clearinghouse for people around the world involved with research, policy and practice related to criminal and juvenile justice and drug control.

National Institute of Justice (NIJ): SEARCH

<http://www.ojp.usdoj.gov/nij/search.htm>

NIJ is the research and development agency of the U.S. Department of Justice and is the only federal agency solely dedicated to researching crime control and justice issues. NIJ provides objective, independent, nonpartisan, evidence-based knowledge and tools to meet the challenges of crime and justice, particularly at the state and local levels.

Office of Justice Programs (OJP)

<http://www.ojp.usdoj.gov/>

Since 1984 the U.S. Office of Justice Programs has provided federal leadership in developing the nation's capacity to prevent and control crime, improve the criminal and juvenile justice systems, increase knowledge about crime and related issues, and assist crime victims.

Public Agenda Online

http://www.publicagenda.org/issues/major_proposals_detail.cfm?issue_type=crime&list=1

Indepth survey and analysis of American attitudes toward crime, punishment, the death penalty and other issues from Public Agenda, a nonpartisan, nonprofit public opinion research and citizen education organization founded in 1975.

Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online

<http://www.albany.edu/sourcebook/>

Continually updated compilation of data on the U.S. criminal justice system, public opinion polls, and offender and situation profiles.

United States Supreme Court

<http://www.supremecourtus.gov/>

Learn about the Court, and look at the lives of present and past justices, as well as read their arguments and opinions on Supreme Court cases.

Temas de la Democracia, Volumen 6, Número 1, julio de 2001

t e m a s d e l a
Democracia



LA JUSTICIA
PENAL EN
ESTADOS UNIDOS

J U L I O D E 2 0 0 1

VOLUMEN 6 NÚMERO 1